



**UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO**

ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

**Responsabilidad penal en los adolescentes en el distrito
judicial de Lambayeque**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

AUTOR:

Abog. Pavel Iván Vásquez Torres

ASESOR:

M. Sc. Walter Ramos Manay

LAMBAYEQUE-PERÚ

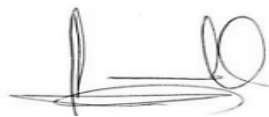
2018

Responsabilidad penal en los adolescentes en el distrito judicial de Lambayeque

PRESENTADA POR:



Abog. Pavel Iván Vásquez Torres
AUTOR



M. Sc. Walter Ramos Manay
ASESOR

Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de: **MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES.**

APROBADA POR:



Dr. Ezequiel Baudelio Chávarry Correa
PRESIDENTE



Mg. Francisco Santiago Delgado Paredes
SECRETARIO



M. Sc. Oscar Vélchez Vélez
VOCAL

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

020

Siendo las 6:00 horas del día viernes 05 de mayo del año Dos Mil Dieciocho, en la Sala de Sustentaciones de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del jurado, designados mediante Resolución N° 0969-2018-EPG de fecha 08 de mayo del 2018, conformado por:

Dr. EZEQUIEL BAUDELLIO CHAVARRI CORREA PRESIDENTE (A)
Mg. FRANCISCO SANTIAGO DELGADO PAREDES SECRETARIO (A)
Dr. OSCAR VILCHEZ VELEZ VOCAL
Mg. RICARDO RAMOS MANAY ASESOR (A)

con la finalidad de evaluar la tesis titulada

RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS ADOLESCENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

presentado por el (la) tesista PAVEL IVAN VASQUEZ TORRES, sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 0969-2018-EPG de fecha 08 de mayo del 2018

El Presidente del jurado autorizó el inicio del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron avaluadas por el (la) sustentante, quien obtuvo 70 puntos que equivale al calificativo de REGULAR

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

Siendo las 07:10 horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.

[Firma]
 PRESIDENTE
[Firma]
 VOCAL

[Firma]
 SECRETARIO
[Firma]
 ASESOR

[Firma]
 Dr. LUIS JAIME COLLANTES SANTISTEBAN
 Director Académico



DEDICATORIA

A mi familia, amigos y docentes; quienes me apoyaron en este camino de crecimiento profesional.

EL AUTOR

AGRADECIMIENTO

A todas aquellas personas que con sus conocimientos, experiencia y apoyo aportaron en la realización de esta investigación.

EL AUTOR

INDICE

DEDICATORIA	IV
AGRADECIMIENTO	V
INDICE.....	VI
RESUMEN	IX
ABSTRACT.....	XI
INTRODUCCION	13
CAPITULO I: ANALISIS Y OBJETO DE ESTUDIO	15
1.1. Situación problemática	15
1.2. Formulación del problema.....	16
1.3. Objetivos.....	16
1.3.1. General.....	16
1.3.2. Específicos	16
1.4. Hipótesis	16
1.5. ¿Cómo surge el problema?	16
1.5.1. Antecedentes de la investigación.....	16
1.6. Tipo, diseño de investigación y análisis.....	20
1.6.1. Tipo de investigación	20
1.6.2. Tipo de análisis.....	20
1.7. Técnicas, Instrumentos e informantes o Fuentes	20
1.8. Población y muestra.....	21
1.8.1. Población.....	21
1.8.2. Muestra	21
1.8.3. Tipo de muestreo.....	22
1.9. Procesamiento de información	22
1.10. Análisis de la información	23
CAPITULO II: MARCO TEORICO.....	24
2.1. Bases teóricas	24
2.1.1. Adolescente infractor en la ley penal	24

2.1.1.1.	Concepto de adolescente.....	24
2.1.1.2.	Adolescente infractor.....	24
2.1.2.	Regulación penal de los menores de edad a través de la historia	25
2.1.2.1.	Código penal de 1862	25
2.1.2.2.	Código penal de 1924	26
2.1.2.3.	Código penal 1991(código actual)	27
2.1.2.4.	Código del niño y del adolescente (ley n° 27337)	28
2.1.2.5.	Código de responsabilidad penal de adolescentes (DL 1348)	29
2.1.3.	Imputabilidad e inimputabilidad.....	30
2.1.3.1.	Imputabilidad.....	30
2.1.3.2.	Inimputabilidad	32
2.1.4.	Responsabilidad penal, responsabilidad restringida	35
2.1.4.1.	Responsabilidad penal juvenil	36
2.1.5.	Derechos y garantías de los infractores.....	39
2.1.5.1.	Según la convención de los Derechos del niño	39
2.1.5.2.	Según el código de los niños y adolescentes	40
2.1.5.3.	Según el código penal de adolescentes	40
2.1.5.4.	Garantías del proceso	44
2.1.5.5.	Principios de la administración de justicia aplicables al adolescente infractor en el sistema jurídico peruano.....	46
2.1.6.	Privación de la libertad a niños o adolescentes infractores	51
2.1.6.1.	Consecuencias.....	53
2.1.7.	Medidas socioeducativas.....	55
2.1.7.1.	Regulación jurídica de las medidas socioeducativas	58
2.1.7.2.	Clasificación de las medidas en nuestro ordenamiento	58
2.1.7.3.	Cifras.....	61
2.1.8.	Investigación fiscal de delitos cometidos por adolescentes	62
2.1.8.1.	Autoridades competentes	62
2.1.8.2.	Denuncia penal	63
2.1.9.	Resocialización del menor infractor en Perú y Latinoamérica	63
2.1.10.	Análisis en relación a convención de Derechos del niño	66

2.1.11. Opinión de la CIDH sobre el tema	66
CÁPITULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	73
IV. PROPUESTA	86
V. CONCLUSIONES	98
VI.RECOMENDACIONES.....	100
ANEXOS.....	105
ANEXO N° 01: Cuestionario	105
ANEXO N° 02: Jurisprudencia.	109

RESUMEN

La investigación titulada "Responsabilidad Penal en los Adolescentes en el Distrito Judicial de Lambayeque" tiene como objetivo analizar y evaluar el desarrollo de la Justicia Penal Adolescente en el Perú, con el fin de determinar si las estrategias implementadas hasta el momento han fortalecido este sistema y si las medidas socioeducativas aplicadas han logrado la resocialización efectiva del adolescente infractor, contribuyendo así a la reducción de la criminalidad juvenil y los niveles de reincidencia en nuestra sociedad.

El propósito de este trabajo es proporcionar conclusiones concretas a la comunidad jurídica sobre un tema de gran importancia que requiere ser revitalizado en la sociedad debido a su relevancia jurídica y social. Para lograr esto, se realiza un análisis exhaustivo de la normativa nacional e internacional relacionada con el tema de investigación, así como de las medidas y estrategias implementadas. Además, se estudian las experiencias exitosas de otros países con el fin de establecer comparaciones y formular una propuesta concreta para su posible implementación.

La tesis se divide en tres partes principales:

En la primera parte, se aborda el objeto de estudio, se presenta la problemática identificada, se describe la justificación de la investigación y se establece el marco teórico, que incluye planteamientos teóricos, normativa y legislación comparada relevante al tema.

La segunda parte se centra en los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento metodológico, donde se detalla la metodología utilizada y se describe cada aspecto del problema identificado.

En la tercera parte se presentan las conclusiones derivadas de la contrastación de los objetivos con los resultados obtenidos. Aquí se incluyen las apreciaciones resultantes del análisis, las conclusiones parciales basadas en la contrastación de

las sub-hipótesis y la conclusión general respaldada por la contrastación de la hipótesis global. También se proporcionan recomendaciones.

Finalmente, se hace referencia a la bibliografía citada en la investigación y se presentan los anexos, que incluyen la propuesta final denominada "Programa para la Resocialización del Adolescente Infractor".

Palabras clave: *justicia penal adolescente, medidas socioeducativas, resocialización, adolescente, responsabilidad, imputabilidad, infracción, reincidencia.*

ABSTRACT

The research titled "Criminal Responsibility in Adolescents in the Judicial District of Lambayeque" aims to analyze and evaluate the development of Juvenile Justice in Peru, in order to determine whether the strategies implemented so far have strengthened this system and if the socio-educational measures applied have effectively achieved the reintegration of the juvenile offender, thus contributing to the reduction of juvenile crime and recidivism levels in our society.

The purpose of this work is to provide concrete conclusions to the legal community on an important topic that needs to be revitalized in society due to its legal and social relevance. To achieve this, a thorough analysis of national and international regulations related to the research topic is conducted, as well as an examination of the measures and strategies implemented. Additionally, successful experiences from other countries are studied to establish comparisons and formulate a specific proposal for possible implementation.

The thesis is divided into three main parts:

The first part addresses the object of study, presents the identified problem, describes the justification of the research, and establishes the theoretical framework, which includes theoretical approaches, regulations, and relevant comparative legislation.

The second part focuses on the results obtained through the application of the methodological instrument, detailing the methodology used and describing each aspect of the identified problem.

The third part presents the conclusions derived from comparing the objectives with the obtained. This includes the insights resulting from the analysis, partial conclusions based on the comparison of sub-hypotheses, and the overall conclusion supported by the comparison of the global hypothesis. Recommendations are also provided.

Finally, references to the bibliography cited in the research are made, and the appendices are presented, which include the final proposal called "Program for the Reintegration of the Juvenile Offender."

Keywords: *adolescent criminal justice, socio-educational measures, resocialization, adolescent, responsibility, imputability, infraction, recidivism.*

INTRODUCCION

En la actualidad, la sociedad se enfrenta a un aumento alarmante de la delincuencia adolescente, lo cual es preocupante no solo por el peligro constante al que están expuestos los ciudadanos, sino también porque revela una falta de acción por parte del Estado para garantizar un entorno seguro para el pleno desarrollo de los niños y adolescentes. Este problema afecta directamente al futuro de la nación. Se ha vuelto común escuchar términos como "sicario adolescente" o "niño ladrón", lo que refleja la cruda realidad que enfrentamos a diario. En muchos casos, estos menores son utilizados por criminales que se aprovechan de su inimputabilidad, tratándolos como infractores en lugar de delincuentes, lo que ha llevado a la impunidad en numerosos casos.

Si bien la sociedad reclama mayor severidad en las penas, es necesario considerar que los niños y adolescentes aún están en proceso de desarrollo y tienen la oportunidad de cambiar y reintegrarse a la sociedad, especialmente considerando que muchas veces provienen de entornos disfuncionales o tóxicos. Por ello, es fundamental no privarlos de oportunidades de desarrollo.

Para abordar esta situación, existe el sistema de Justicia Penal Adolescente, cuya finalidad es educativa y restauradora. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado plenamente su objetivo, como lo demuestran el aumento de la delincuencia adolescente y las tasas de reincidencia. Es necesario evaluar si las estrategias implementadas hasta ahora han sido efectivas y considerar la posibilidad de replantear la forma en que se resocializa a los menores infractores mediante enfoques dinámicos y diversos que garanticen resultados positivos y diferentes.

En los últimos cinco años, los actos delictivos cometidos por adolescentes y adultos jóvenes han aumentado significativamente, según las estadísticas de la división de escena del delito de la PNP. Anteriormente, se realizaban aproximadamente 10 detenciones de jóvenes al día, pero ahora esta cifra se ha disparado a 10 detenciones por hora. Este incremento refleja la urgente necesidad de tomar acciones diversas y disruptivas para lograr un cambio real que la sociedad tanto espera. La juventud

representa tanto el presente como el futuro, por lo que es justo y necesario preocuparse por ellos y trabajar en su beneficio.

CAPITULO I: ANALISIS Y OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Situación problemática

En una sociedad, las leyes se establecen para promover una convivencia pacífica y el respeto mutuo de los derechos. Cuando alguien viola la Ley Penal, en la mayoría de los casos, se enfrenta a la restricción de su libertad y a la imposición de una pena en una institución penitenciaria. Sin embargo, cuando se trata de infracciones cometidas por menores de edad, surge un dilema.

La coyuntura presente en relación con la responsabilidad penal de los menores contradice las disposiciones legales penales. El artículo 40 de la CDN[CDN] delineó los principios a seguir cuando un adolescente viola la ley penal. Por consiguiente, es esencial abordar al adolescente con respeto a su dignidad y valor, lo que fomenta el respeto por los derechos humanos reconocidos y las libertades fundamentales de los demás.

Además, se considerará la edad del niño y se buscará fomentar su reintegración para que pueda asumir un papel constructivo en la sociedad. Todo esto se vuelve esencial cuando se implementa la "planificación penal mínima, la cual establece una serie de reglas y mecanismos especiales para tratar a los menores de edad que cometen infracciones penales". "Entre las normas internacionales que se encargan de regular la situación penal de los menores de edad tenemos a la CDN(1989), las reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia (1985) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (1990)".

Indudablemente, el análisis socio-jurídico sobre la reducción de la responsabilidad penal de los adolescentes ha provocado diversas opiniones respecto a la creación de un marco legal que reconozca a los adolescentes como individuos con derechos, pero también con deberes, compromisos y

responsabilidades que difieren de los adultos. De esta forma, su ejercicio y aplicación gradual se ajustan conforme a factores como la edad y el desarrollo emocional.

Este estudio tiene como objetivo investigar los impactos que las medidas socioeducativas están teniendo en el Perú, considerando el contexto actual, y evaluar si estas medidas están adecuadas a las necesidades de la sociedad.

1.2. Formulación del problema

"¿Considera que las medidas socioeducativas aplicadas al adolescente infractor han logrado cumplir su objetivo de reintegrarlo socialmente?"

1.3. Objetivos

1.3.1. General

"Determinar si las medidas socioeducativas aplicadas al adolescente infractor han cumplido con su rol socializador"

1.3.2. Específicos

"Evaluar las causas de la delincuencia juvenil; Conocer cuáles son las medidas socioeducativas aplicadas al adolescente infractor; Analizar las medidas socioeducativas y sus efectos en los adolescentes infractores".

1.4. Hipótesis

"Las medidas socioeducativas son ineficaces ya que no cumplen con el fin de resocialización".

1.5. ¿Cómo surge el problema?

1.5.1. Antecedentes de la investigación

“EL COMPONENTE SOCIO EDUCATIVO: ¿SANCIÓN U OFERTA SOCIAL?, para obtener el Grado de Doctor en la Universidad Nacional de San Marcos, (2006)”:

AUTOR: Lavanderos Svec, Jorge concluyó:

Para que un adolescente sea considerado culpable por una conducta que sea típica y antijurídica, es necesario que estén presentes los tres elementos esenciales de la culpabilidad: la imputabilidad, la conciencia de la ilicitud y la autodeterminación. La imputabilidad se refiere a la capacidad del adolescente para entender el carácter indebido de su acción y para actuar de acuerdo con ese conocimiento. Un individuo imputable es aquel que cumple con los requisitos establecidos por la ley para ser responsable de sus acciones y, por lo tanto, enfrentar una sanción. La imputabilidad implica tanto la capacidad de comprensión como la capacidad de actuar voluntariamente según esa comprensión.

El adolescente debe tener un nivel adecuado de madurez y conciencia moral para que su acción sea considerada consciente y voluntaria. La evaluación de la imputabilidad se basa en la capacidad del autor para ser motivado por la norma de acuerdo con su etapa de desarrollo. Se tienen en cuenta sus características psicológicas y su nivel de conciencia. Esto subraya la importancia de aplicar una sanción adecuada, ya sea penal o social, no solo considerando el acto en sí, sino también la conciencia y motivación detrás de él. Si se cumplen los requisitos necesarios, el Estado habrá actuado de manera responsable al asegurar que el culpable haya actuado con un grado suficiente de participación interna para que su acción sea reprochada por la ley.

“Los adolescentes poseen una serie de garantías y derechos fundamentales, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, compartiendo la conclusión de este investigador y desde mi perspectiva

personal, considero que actualmente nos encontramos frente a un nuevo panorama”. Con el avance de la ciencia informática y la tecnología, muchos adolescentes parecen tener un nivel de pensamiento más desarrollado que en décadas pasadas. En consecuencia, “al cometer un delito tipificado en el código penal peruano, algunos de ellos cumplen con los elementos mencionados anteriormente: la imputabilidad, la conciencia de la ilicitud y la autodeterminación”.

El Estado, en su papel soberano y responsable de proteger los derechos de todos los ciudadanos peruanos, “tiene la obligación de administrar justicia de manera adecuada a través de sus instituciones jurídicas, como el Ministerio Público y el Poder Judicial”. Esto implica implementar normativas especiales para sancionar a los menores infractores, teniendo en cuenta las causas subyacentes de esta problemática grave. El objetivo es que las sanciones y medidas socioeducativas no solo castiguen al adolescente, sino que también lo rehabilite y lo reintegre a la sociedad como un ciudadano transformado y en mejores condiciones que antes.

El sistema penal de responsabilidad juvenil se establece para abordar una problemática que, como todas, demanda la implementación de medidas adecuadas, siempre respetando los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Perú. La eficacia de este sistema estará determinada por la manera en que se apliquen correctamente estas normas.

“LOS MENORES DE EDAD INFRACTORES DE LA LEY PENAL para obtener el Grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid, (2009)”.

AUTOR: Cruz y Cruz Elba, en la que concluyó:

“Si consideramos los instrumentos internacionales de Derechos Humanos como los avances más importantes que la civilización ha realizado en el ámbito jurídico para la protección de valores que pueden juzgarse de importancia universal; entonces, la tendencia a seguir por los legisladores de los diversos países debe ser, a grandes rasgos, el modelo garantista, cuyo punto de partida lo constituye el instrumento internacional conocido como CDNde 1989. En este sentido, el interés superior del niño es la pauta a seguir en el Derecho de Menores Infractores. No obstante ello, ante la alarma social que ha generado en últimos tiempos el comportamiento ilícito de los jóvenes, motivado en gran medida por un manejo poco ético en los medios y por la propaganda política, se ha impulsado la realización de reformas que se constriñan a elevar la severidad de las medidas y del tratamiento dado a los menores, con un carácter meramente sancionador”

“A nivel mundial, se están promulgando leyes especiales para procesar, proteger y sancionar a los adolescentes que cometen una variedad de actos delictivos, incluso a una temprana edad”. Estos adolescentes son conscientes de que sus acciones contrarias a la ley conllevarán una sanción. Como en todo sistema penal, las acciones tienen consecuencias, y cada país responde a las altas tasas de infracciones juveniles con una variedad de medidas para contrarrestar este fenómeno. Varias instituciones internacionales han expresado su preocupación por este grave problema y han instado a encontrar medidas adecuadas para abordar cada situación. Entre estas medidas, las socioeducativas son las más comunes y se promueven como una forma de intervenir en la vida de los adolescentes infractores, buscando su rehabilitación y reintegración en la sociedad.

1.6. Tipo, diseño de investigación y análisis

1.6.1. Tipo de investigación

El estudio adopta un enfoque descriptivo-explicativo, con el propósito de detallar y comprender las medidas socioeducativas implementadas en el tratamiento de los adolescentes infractores, así como investigar las acciones y estrategias empleadas a lo largo del tiempo para facilitar su reintegración social.

El diseño de la investigación será de tipo no experimental y de naturaleza transversal, centrándose en describir y explicar los fenómenos observados.

En este estudio, se llevará a cabo una investigación de campo que integrará información doctrinal junto con datos estadísticos obtenidos a través de encuestas o cuestionarios realizados en el distrito judicial de Lambayeque. El objetivo es validar la hipótesis planteada al inicio del trabajo, ofreciendo una respuesta provisional a la investigación.

1.6.2. Tipo de análisis

El estudio se centrará en el Distrito Judicial de Lambayeque como unidad de análisis, abarcando estadísticas sobre casos resueltos y también la opinión del público en general.

1.7. Técnicas, Instrumentos e informantes o Fuentes

Se empleará la técnica del análisis documental, utilizando fichas textuales y de resumen como instrumentos de recolección de datos. Las fuentes de información serán libros, documentos oficiales e Internet, que nos

proporcionarán planteamientos teóricos, normativas y otros datos relevantes para el estudio

También se hará uso de la técnica de la encuesta, empleando como instrumento un cuestionario. “Los informantes serán el público en general del Distrito Judicial de Lambayeque”. Finalmente se hizo uso de la técnica de la entrevista, utilizando como herramienta una guía de entrevista. “Estas entrevistas estarán dirigidas específicamente a jueces y personas que hayan trabajado en las instituciones responsables de la rehabilitación del adolescente infractor”.

1.8. Población y muestra

1.8.1. Población

La población objeto de estudio consiste en el público en general de la ciudad de Chiclayo, que será el grupo al que se aplicarán los instrumentos de recolección de datos. Además, se analizarán casos resueltos para respaldar la investigación.

1.8.2. Muestra

En algunas situaciones, no es viable examinar todos los miembros de una población, por lo que se opta por elegir una muestra, la cual consiste en una porción representativa de la población en cuestión. El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y

diferencias encontradas en la población, es decir ejemplificar las características de ésta.¹

1.8.3. Tipo de muestreo

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos (se basan en el principio de equiprobabilidad, ya que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra) y métodos de muestreo no probabilísticos (se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa).

La presente Investigación aplica el tipo de muestreo no probabilístico, para el registro de datos, debido al carácter de la información que se necesita recabar. Dentro del tipo de muestreo probabilístico, para seleccionar a la muestra se acudirá al método de muestreo por conveniencia, por el cual se seleccionará directa e intencionadamente a los individuos de la población.

En consecuencia, se ha establecido una muestra de 100 individuos, preferiblemente adolescentes, a quienes se les administrará una encuesta con el propósito de evaluar su comprensión y percepción en relación con las medidas socioeducativas implementadas para los adolescentes infractores.

1.9. Procesamiento de información

La información recopilada a través de las técnicas e instrumentos mencionados se introducirá en sistemas informáticos, como las

¹Extraído del Blog. Probabilidad y estadística, disponible en la dirección: <http://jaimeprobabilidadyestadistica.blogspot.com/2011/04/muestreo-probabilistico-y-no.html>

herramientas de MS Office. Los datos se presentarán en forma de figuras, gráficos, tablas o resúmenes, con detalles porcentuales y clasificaciones de mayor a menor, así como promedios o totales.

1.10. Análisis de la información

En cuanto a los datos presentados en forma de figuras, gráficos, tablas o resúmenes, se analizarán e interpretarán, y se integrarán para ofrecer una evaluación completa. Esto incluirá promedios de promedios o de sumas de promedios, tanto de aspectos positivos como negativos, junto con las causas de lo negativo. Estas evaluaciones resultantes del análisis se presentarán como conclusiones.

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1. Bases teóricas

2.1.1. Adolescente infractor en la ley penal

2.1.1.1. Concepto de adolescente

Según el código del niño y adolescente; adolescente es todo ser humano desde los doce años de edad hasta los dieciocho años .En la actualidad se manejan nuevos paradigmas para concebir jurídicamente a los adolescentes, ya no como “sujetos de tutela estatal”, criterio clásico contemporáneo debido a sus supuestas carencias e incapacidades o a su minoría de edad, si no como personas completas y capaces en respuesta a la necesidad socio jurídica de concebirlos en su condición de personas plenas de derechos, donde la protección integral busca incluirlos en el mundo jurídico y social contemporáneo. ²

2.1.1.2. Adolescente infractor

El Código de los Niños y Adolescentes define como adolescente infractor penal a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal.

Luego establece que el adolescente infractor mayor de 14 años, será pasible de medidas socioeducativas. Y el niño y adolescente infractor menor de 14 años, será pasible de medidas de protección. Consecuentemente el niño y el adolescente pueden ser sujetos activos en la realización de un acto reprochable por la sociedad y calificado como delito o falta.

² Código Civil, Procesal Civil, Código del niño y del Adolescente. Jurista Editores E.I.R.L. Lima 2014.

Hoy en día, la doctrina de la protección integral ha desmontado el mito asociado a la situación irregular, que implicaba una absoluta irresponsabilidad por parte de los menores de edad, al reconocer que estos pueden cometer delitos o faltas, contrariamente a lo que se afirmaba anteriormente, cuando solo se les atribuían "actos antisociales" evitando la palabra delito. "Sin embargo, el enfoque realista de la doctrina de la protección integral beneficia tanto al adolescente infractor como al niño que, debido a su desviación social, comete un acto considerado como una agresión merecedora de reproche por parte de la sociedad". Esto se debe a la creación de un Derecho Penal garantista, el cual, aplicado a través de un procedimiento particular, no impone una pena al niño o al adolescente. En el caso de los menores de hasta 14 años, quedan excluidos de la actividad procesal judicial y solo están sujetos a un procedimiento administrativo, denominado investigación tutelar, mediante el cual el juez determina la medida de protección correspondiente. Para los adolescentes de 14 a 18 años, se aplica una investigación judicial sumaria, durante la cual el juez impone una medida socioeducativa.

2.1.2. Regulación penal de los menores de edad a través de la historia

2.1.2.1. Código penal de 1862

una trayectoria paralela. En el Código Penal de 1862, se estipulaba que los menores de nueve años estaban exentos de responsabilidad penal y, por ende, de cualquier castigo. Sin embargo, para aquellos con edades entre los nueve y quince años, la situación era distinta "si se probaba que actuó con discernimiento", "era ya sometido al Derecho penal". Para los jóvenes entre nueve y quince años habría pues la presunción iuris

tantum de “no actuó con discernimiento”. Hubo, entonces, con este código un modelo penal-criminal en el control de la delincuencia juvenil.

2.1.2.2. Código penal de 1924

El 28 de julio de 1924 se promulgó el nuevo Código Penal. Aquí se nota ya la influencia de la doctrina de la situación irregular; influencias que en su momento fueron calificadas como “mejoras notables” del título de tratamiento de menores. Pues bien, dichas “mejoras notables” se manifestarían en los artículos 137 al 149, que corresponden al libro XVIII (tratamiento de menores), y en el artículo 410 que regula la jurisdicción especial de menores.

Según este código, hasta los dieciocho años se aplicaban medidas tutelares; y de dieciocho a veintiún años las penas eran atenuadas. En su artículo 142 se preveían medidas correccionales para los 31 jóvenes comprendidos entre trece y dieciocho años, con una duración mínima de dos años, lo cual terminaba por convertir (si no lo era ya) dichas medidas en verdaderas penas. (Decreto Legislativo N° 635, promulgado 03/04/91, publicado 08/04/91).

Después vendría el primer Código de Menores que tendría el Perú. El Código de Menores de 1962 estaría ya bajo la influencia de la doctrina de la situación irregular y estaba plagado de artículos referentes al “peligro y abandono morales” como presupuestos de medidas tutelares; establecía además, en el procedimiento, un modelo inquisitivo donde era el juez quien iniciaba la investigación

correspondiente, dictando también “en favor” del menor las medidas que juzgue correspondiente (Art. 105).

2.1.2.3. Código penal 1991(código actual)

Sería recién en 1990, con la ratificación de la CDN, cuando se daría el salto cualitativo hacia la doctrina de la protección integral. Con la Convención ratificada, y en atención a su Art. 1 que expresa que “Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole apropiadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”, se promulgó en 1992 el Código de Niños y Adolescentes.

“Este código, no así la Convención, diferencia entre Niño (hasta los doce años) y Adolescente (de doce a dieciocho años) (Art. I del Título Preliminar), considerándolos plenamente como sujetos de derechos (Art. II del Título Preliminar). A la vez se eliminarán las medidas privativas de libertad por razón de situaciones de abandono; la medida de internación será utilizada como último y extremo recurso y se hace un reconocimiento expreso de las garantías procesales 32 al adolescente infractor”.

Además se establece en el artículo IX “el proceso como hecho humano”: “El proceso nunca más debe ser una controversia fría y sólo de carácter técnico, formal o puramente legal, sino un hecho humano con un trasfondo familiar, social, económico, etc.”. Se establecería así un sistema penal para los niños y adolescentes diferenciado del de los adultos.

A pesar del avance en la relación entre el Estado y los menores de edad, representado por la “ratificación de la CDNy la

promulgación del Código de Niños y Adolescentes en 1992, en 1998, debido a la percepción de una situación de inseguridad provocada por el aumento de la delincuencia organizada y la violencia urbana en el país, el Congreso de la República otorgó al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad nacional a través de la Ley N° 26950. Como resultado, se emitió, entre otras normas, el decreto legislativo 895, conocido como Ley contra el terrorismo especial”.

A través de este decreto “se redujo la edad para la responsabilidad penal a dieciséis años en casos de delitos de terrorismo especial, excluyendo del ámbito del Sistema Penal Juvenil a los adolescentes de dieciséis a dieciocho años para someterlos a penas de privación de libertad que oscilaban entre veinticinco y treinta y cinco años, a cumplirse en prisiones de máxima seguridad para adultos y bajo un régimen penitenciario especial”. Estas disposiciones, junto con el DL 899, contradecían los principios de la Convención sobre los DNYA y representaban una violación de los DHYME³.

2.1.2.4. Código del niño y del adolescente (ley n° 27337)

Finalmente, “en el año 2000 entra en vigencia el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes que restablece el respeto de la CDN, estableciendo en su artículo VII del Título Preliminar” que “La Convención es fuente de interpretación y aplicación”, y en el artículo VIII que “es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base

³ BARLETTA, María. Curso Derechos de la Niñez y Adolescencia. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2011

velar por la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidas en el presente Código y en la CDN”.

Se está retomando un enfoque de legalidad que respeta los derechos humanos de los menores de edad. A lo largo del tiempo, se observa que los Estados no establecieron límites claros en el tratamiento de la delincuencia juvenil, inicialmente no reconociendo los derechos humanos de los menores, quienes fueron tratados junto con los adultos en un mismo sistema penal.

El reconocimiento pleno de los derechos e integridad de los menores comenzó principalmente en “1989 con la CDN. Este reconocimiento implicó establecer límites al poder del Estado en el control de la delincuencia juvenil”, reconociendo los derechos específicos de los niños y adolescentes y estableciendo un sistema de justicia propio para ellos, diferente al de los adultos, como una afirmación de sus derechos humanos. Sin embargo, esta afirmación aún es relativamente reciente y puede considerarse frágil.

En el caso del Perú, este reconocimiento integral de los derechos de los niños y adolescentes comenzó a ser efectivo en 1993, pero luego se vio afectado por el decreto legislativo 895 en la misma década. Actualmente, con el Nuevo Código de Niños y Adolescentes y la reafirmación de los principios de la CDN, se observa un nuevo intento por parte del poder político de incluir a los jóvenes en el sistema penal diseñado para adulto.

2.1.2.5. Código de responsabilidad penal de adolescentes (DL 1348)

Este documento legal abarca todos los aspectos relacionados con el tratamiento especial destinado a los adolescentes infractores. Desde los principios que deben ser respetados hasta los procedimientos procesales a seguir, el código detalla el proceso aplicable a la responsabilidad penal adolescente, incluyendo la aplicación del proceso especial de terminación

anticipada y las medidas socioeducativas. Todo ello se realiza en estricto respeto a los derechos fundamentales de los adolescentes involucrados y fue promulgado en enero de 2017 mediante un Decreto Legislativo que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

2.1.3. Imputabilidad e inimputabilidad

Para que se configure un delito, es necesario que la persona lleve a cabo una acción que sea típica, antijurídica y culpable. A partir de estos tres elementos, se determina si el acto cometido es imputable o inimputable. Es esencial tener una comprensión clara de las diferencias entre ambos conceptos, especialmente en el caso de infractores menores de edad, donde la cuestión de la inimputabilidad es muy discutida.

2.1.3.1. Imputabilidad

Gaitán-Mahecha manifiesta:

(...) “la capacidad de entender y de querer, es decir la posibilidad de atribuir a una persona un resultado a título de dolo o culpa. En otros términos, es la capacidad de ser culpable, de actuar dolosa o culposamente. Mientras la culpabilidad es el juicio sobre la conducta, la imputabilidad es el juicio sobre la capacidad del sujeto. La imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, ya que solamente puede ser culpable el que es imputable”⁴.

Velásquez considera que, “implica un conjunto de presupuestos de índole psicológica emanados de la personalidad del autor al momento de realizar el hecho, traducidos en la aptitud para comprender el carácter injusto del mismo y para dirigir y accionar conforme a dicha comprensión”⁵

⁴ Gaitán-Mahecha B. La imputabilidad. Pág. 47, Nuevo Foro Penal. 1982.

⁵ Velásquez Velásquez, F. Derecho penal parte general. Pág. 509 Bogotá: Editorial Temis. (2004)

Según Mendizábal Oses, la imputabilidad y la responsabilidad se distinguen en función de la voluntad propia y la intervención de un tercero. La imputabilidad implica una voluntad propia que se manifiesta a través de una acción individualizada. Por otro lado, la responsabilidad incluye la participación de un tercero en el proceso.

“La idea de imputabilidad lleva aparejada, como a algo propio, la de responsabilidad, aunque ambas ideas no puedan confundirse. En la imputabilidad, la acción se considera en relación directa con su agente productor. En cambio, la responsabilidad contempla aquella acción en cuanto afecta a un tercero. La imputabilidad que es imprescindible para todas las acciones morales y su subsiguiente calificación, se diferencia de la responsabilidad, en que ésta sólo surge de las acciones que de alguna forma lesionan o perjudican a un tercero”.

(...) “Si nos planteamos qué causas son las que deben excluir o eliminar la imputabilidad, y, su derivada, la responsabilidad, veremos cómo únicamente pueden imputarse las acciones y las omisiones que emanan de la voluntad libremente manifestada por el sujeto. Por eso, todas aquellas causas que incidan sobre la voluntad individual, alterando o excluyendo la libre autodeterminación, eliminan *ipso facto* la imputabilidad. Pero siempre que tales causas sean extrínsecas al sujeto, y no hayan sido queridas o buscadas a propósito por él”⁶

Figuerola Navarro, manifiesta de manera clara y precisa lo siguiente:

“la capacidad de actuar culpablemente, capacidad que se le reconoce, en principio, a todo hombre por estar dotado de inteligencia y libertad que le permite conocer y valorar el deber de

⁶ Mendizábal Oses, L., Derecho de Menores. Teoría General. Pirámide, Pág. 31-32; Madrid, 1977.

respetar la norma y de determinarse espontáneamente. Así, hay que considerar imputable al que reúne aquellas características bio-psíquicas que, con arreglo a la legislación vigente, le hacen capaz de ser responsable de sus propios actos. Decimos que un sujeto es inimputable cuando no tiene la capacidad necesaria de entender la norma penal”⁷

En una definición personalizada, la imputabilidad se puede entender como la capacidad de un individuo para llevar a cabo una acción que es considerada como típica, antijurídica y culpable. Esta persona es consciente de que su acto conlleva una consecuencia penal y está plenamente informada de que merece una sanción. En otras palabras, el individuo que comete un delito tiene tanto la capacidad jurídica como moral para tomar decisiones por sí mismo, asumiendo así las responsabilidades correspondientes y enfrentando las consecuencias legales de sus acciones.

2.1.3.2. Inimputabilidad

Agudelo Betancur describe la inimputabilidad como la incapacidad de una persona para comprender la gravedad de sus acciones o para regular su comportamiento según las normas legales debido a inmadurez psicológica o trastorno mental. Según el Código Penal Peruano, se exime de responsabilidad penal a individuos en situaciones como anomalías psíquicas, alteraciones graves de la conciencia, legítima defensa, actuación para evitar un peligro actual e insuperable, entre otras circunstancias establecidas. Esto incluye también a menores de 18 años y al personal de las Fuerzas Armadas

⁷ Figueroa Navarro, C., y Martínez Galindo, G., Imputabilidad, en García Valdés, C.; (Dir.): Diccionario de Ciencias Penales. Pág. 299 Edisofer, Madrid, 2000.

y Policía Nacional del Perú en ciertos contextos de cumplimiento de su deber.⁸

Se puede notar que en este artículo se enumeran varios criterios mediante los cuales “una persona que ha cometido un delito puede solicitar ser declarada inimputable. Sin embargo, la defensa debe ser efectiva y sólida para demostrar que cumple con alguno de los 11 criterios establecidos en el artículo 20 del Código Penal”.

Considerando que uno de estos criterios es "2. El menor de 18 años", lo cual es el foco de esta investigación, se debe analizar la cuestión de la inimputabilidad desde esta perspectiva específica.

“La imputabilidad penal de un menor debe tomar en consideración, en mayor medida que en el caso de los adultos, las circunstancias personales del menor. De hecho, es esencial que cualquier medida sancionadora-educativa (o, en algunos casos, una pena juvenil, como sostendré más adelante) se ajuste al estudio de la personalidad del menor”. Estas consideraciones son completamente compatibles con la imputabilidad penal del menor y deben ser evaluadas en conjunto con la gravedad del acto cometido (culpabilidad).

El Artículo 23 del Código de Responsabilidad Penal establece la exoneración de responsabilidad penal para los menores de edad.

Artículo 23.- Exoneración de responsabilidad penal

El adolescente quedará exonerado de responsabilidad penal si presenta alguna anomalía psíquica, una grave alteración de la conciencia o sufre de alteraciones en la percepción que afecten gravemente su comprensión de la realidad, impidiéndole entender

⁸ Código Penal Peruano vigente, artículo 20.

el carácter delictivo de su acción o actuar en consecuencia a esa comprensión.

“Si el Fiscal considera que el adolescente está involucrado en alguno de los supuestos mencionados, solicitará al Juez de la Investigación que convoque a una audiencia”. Si se verifica que el adolescente se encuentra en esa situación, se emitirá una sentencia que puede ordenar su tratamiento ambulatorio o su internamiento en un centro de salud mental.

“Si durante el transcurso del Juicio Oral se confirma la presencia de alguno de los supuestos mencionados, el Juez de Juzgamiento emitirá una sentencia que puede ordenar el tratamiento ambulatorio o el internamiento del adolescente en un centro de salud mental”.

Vázquez González sostiene que, “al evaluar la inimputabilidad en menores de edad, es necesario considerar una variedad de factores, que van desde las características físicas y biológicas hasta las psíquicas”, entre otros aspectos.:

(...) se reconoce que la edad biológica y el grado de madurez no son los únicos elementos determinantes para evaluar la imputabilidad penal de un menor. A lo largo del tiempo, se han utilizado distintos enfoques para abordar esta cuestión, como las perspectivas biológicas, psicológicas y psicológico-jurídicas. El primer enfoque se centra en identificar las causas, ya sean de índole biológica o psiquiátrica, que pueden eximir de responsabilidad penal, y a partir de ahí, establecer una definición doctrinal de la imputabilidad personal. El segundo enfoque se relaciona con el concepto de culpabilidad desde un punto

de vista psicológico, considerando la capacidad del individuo para comprender o querer el acto delictivo al momento de cometerlo. Por último, las perspectivas psicológico-jurídicas se refieren al concepto de culpabilidad normativa, donde se valora la capacidad del sujeto para entender la injusticia de sus acciones y actuar en consecuencia, lo cual requiere cierto nivel de madurez biológica. Adoptar exclusivamente una perspectiva biológica llevaría a declarar la inimputabilidad del menor por debajo de la edad establecida por la ley, mientras que una perspectiva puramente psicológica sería insuficiente para justificar la irresponsabilidad penal basada en la edad⁹

2.1.4. Responsabilidad penal, responsabilidad restringida

Como se ha señalado previamente, los menores de dieciocho años permanecen considerados como inimputables en la actualidad, lo que implica que no son legalmente responsables por sus acciones delictivas según el derecho penal. Aunque un menor puede no tener un conocimiento preciso de las consecuencias jurídicas y sociales de sus actos delictivos, suele entender que cometer acciones como agredir a otra persona sin justificación o violar la ley conlleva responsabilidad penal y puede resultar en sanciones proporcionales a la gravedad del delito. No obstante, el sistema penal, operado a través del Código de Niños y Adolescentes, tiene una justificación en la aplicación de sanciones a los menores infractores.

“En situaciones especiales, como los delitos cometidos por adolescentes infractores, se aplican las disposiciones establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N°27337) del ordenamiento jurídico peruano. En tal sentido, cuando un adolescente comete un delito tipificado en el Código Penal, se considera simplemente una infracción y el individuo es catalogado como un adolescente infractor”.

⁹ VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., Delincuencia juvenil. Pág. 222 y 223, citado en ⁹ CÁMARA ARROYO, S. “Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artículo 19 CP y tipologías de delinquentes juveniles conforme a su responsabilidad criminal”. Pág. 258.

El artículo 184 del Código de los Niños y Adolescentes contempla dos tratamientos distintos para los adolescentes infractores:

1.- Cuando el adolescente infractor es mayor de catorce años, será pasible de medidas socio-educativas previstas en el presente código.

2.- Cuando el niño o adolescente infractor es menor de catorce años, era pasible de medidas de protección previstas en el presente código.

“Como se puede notar, los adolescentes infractores no tienen ninguna responsabilidad penal; si cometen algún delito, solo pueden ser sancionados con medidas socio-educativas, tales como amonestaciones, prestación de servicios, asistencia a programas de libertad asistida, restricción de libertad y, en última instancia, internamiento en establecimientos para tratamiento”.

“Para las infracciones más graves, como los delitos según el Código Penal, la sanción máxima que puede recibir un adolescente infractor es el internamiento por un máximo de 10 años, como en los casos de asesinatos u homicidios calificados”.

Sin embargo, si este acto ilícito fuera juzgado en el ámbito del derecho penal, se observaría que, para los delitos de homicidio calificado, “la sanción no sería menor a quince años de pena privativa de la libertad, pudiendo llegar hasta treinta y cinco años según el artículo 29 del Código Penal”.

2.1.4.1. Responsabilidad penal juvenil

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos”, reconocida internacionalmente como el “Pacto de San José de Costa Rica”, del cual Perú forma parte desde la Constitución de 1979, en su artículo 5, apartado 5, establece que: *“cuando los menores puedan ser procesados deben ser separados de los adultos y llevados ante Tribunales especializados, con la mayor celeridad posible para su tratamiento”*. Teniendo en cuenta que los menores de edad se consideran parte de la población vulnerable, el principio del interés superior del niño debe ser una prioridad para cualquier Estado de Derecho.

Siguiendo esta convención, se plantean distintos enfoques respecto a la Responsabilidad Penal Juvenil o Justicia Penal Juvenil, como se conoce en otras naciones latinoamericanas. Según el doctrinario Cillero, M. (2000), este aspecto requiere un análisis detenido de diversos puntos específicos. Para él, es fundamental abordar con precisión el establecimiento de la responsabilidad penal de los jóvenes para garantizar una protección efectiva de los derechos de los infractores juveniles. Esto implica considerar al niño como sujeto de derechos con una responsabilidad que evoluciona gradualmente, así como atribuir responsabilidad por la participación en actos punibles. Además, se debe aplicar el principio de legalidad penal y considerar el uso de oportunidades y fórmulas de remisión del procedimiento como norma general. Se deben intensificar las garantías penales y procesales, y se deben tener en cuenta la dignidad personal, la integración social y la responsabilidad como principios fundamentales de las consecuencias jurídicas aplicables. También se debe reconocer la naturaleza restrictiva de los derechos en las sanciones, y se debe regular estrictamente el uso, la duración y las condiciones de la privación de libertad.

Asimismo, SERRANO (2008) señala que:

“El encarcelamiento tiene un impacto significativo en los menores. Su percepción del tiempo difiere de la de los adultos y suelen sufrir más al ser separados de su entorno social y familiar, enfrentándose a la soledad. Además, sus personalidades están en proceso de formación, lo que los hace más receptivos al desarrollo. Por lo tanto, esta situación genera necesidades específicas, así como oportunidades y amenazas particulares para su crecimiento futuro, y una sensibilidad especial hacia el encarcelamiento y sus posibles efectos negativos. En este sentido,

la implementación de la pena de prisión, con el objetivo de preservar la dignidad humana y el principio de proporcionalidad, debe tener en cuenta estas circunstancias (...)”¹⁰

En Perú la Responsabilidad Penal Juvenil está regulada a través del “Decreto Legislativo Que Aprueba El Código De Responsabilidad Penal De Adolescentes” en enero 2017, este código “establece, delimita y especifica todos los, principios, actos procesales, derechos de los adolescentes y todos los actos especiales que requieran practicarse en delitos cometidos por adolescentes, delimita en su Artículo I del Título Preliminar, lo que para las normas peruanas se debe de entender como responsabilidad penal juvenil”:

Artículo I.- Responsabilidad penal especial

1. *Los adolescentes con edades comprendidas entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años tienen derechos y deberes, y son responsables por la comisión de infracciones bajo una responsabilidad penal especial, tomando en cuenta su edad y características personales.*
2. *Para aplicar una medida socioeducativa, es necesario establecer la responsabilidad del adolescente. Se prohíbe cualquier forma de responsabilidad objetiva*¹¹.

“El Código de los Niños y Adolescentes establece garantías procesales y penales. Sin embargo, con la entrada en vigor de este nuevo código, es evidente que el país ha dado un paso significativo”. Esto se debe a que en la

¹⁰ Citado en DÜNKEL, Frieder; VAN ZYL SMIT, Dirk, “Implementación del encarcelamiento juvenil y derecho constitucional en Alemania”, en: SERRANO MAÍLLO, Alfonso; GUZMÁN DÁLBORA, José Luis (Eds.), Procesos de infracción de normas y de reacción a la infracción de normas: dos tradiciones criminológicas. Nuevos estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez, Madrid: Dykinson, 2008, p. 214. La sentencia es del 31 de mayo de 2006, BVerfG (2006) 2 BvR 1673/04-2 BvR 2402/04.

¹¹ Decreto Legislativo Que Aprueba El Código De Responsabilidad Penal De Adolescentes. Art. I. (2017)

actualidad “muchos actos delictivos son cometidos por menores de edad que son reclutados desde temprana edad y preparados para convertirse en futuros líderes. Con el tiempo, estos jóvenes representan un peligro inminente para la sociedad”.

2.1.5. Derechos y garantías de los infractores

2.1.5.1. Según la convención de los Derechos del niño

“El niño o adolescente que cometa una infracción, o del que se asuma que ha cometido una, tiene todos los derechos y garantías que el derecho internacional humanitario o de los derechos humanos reconoce a los adultos en situaciones similares”. Por lo tanto, los Estados partes se comprometen a garantizar, ante todo y predominantemente.

- ✓ “El principio de legalidad de la ley penal implica que no se puede afirmar que algún niño o adolescente ha violado las leyes penales, ni se les puede acusar o declarar culpables por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales en el momento en que ocurrieron”.
- ✓ Se debe aplicar los derechos procesales fundamentales, lo que significa que todo niño o adolescente acusado de cometer un delito debe recibir y disfrutar de la garantía de la presunción de inocencia¹². Los derechos procesales incluyen el derecho a conocer los cargos que se le imputan, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, el derecho a permanecer en silencio y no autoincriminarse, el derecho a

¹² JIMÉNEZ, Nydia. Causas de Criminalidad en los menores, pp. 49 – 123. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1978.

interrogar a los testigos de cargo, el derecho a impugnar las decisiones que lo afecten, el derecho a la privacidad, y, si es necesario, el derecho a contar con un intérprete en su propio idioma.

2.1.5.2. Según el código de los niños y adolescentes

Derechos individuales

“El Código de los Niños y Adolescentes establece los derechos del adolescente infractor, los cuales no son exhaustivos, sino enumerativos”. Además de estos derechos, se deben agregar los contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos, la CDNy otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Estos derechos son:

- ✓ Ningún adolescente debe ser privado de su libertad sin una orden escrita y motivada del juez, excepto en casos de flagrante infracción penal, en los que puede intervenir la autoridad competente.
- ✓ “El adolescente tiene derecho a impugnar la orden que lo privó de su libertad y a ejercer la acción de Hábeas Corpus ante el juez especializado”.
- ✓ Se informará al juez, al fiscal y a los padres o responsables sobre la privación de libertad del adolescente y el lugar donde se encuentra detenido. “Estos serán informados por escrito de las razones de su detención, así como de los derechos que le corresponden y de la identificación de los responsables de su detención”. En ningún caso se le negará el derecho a la defensa.
- ✓ “Los adolescentes privados de libertad permanecerán separados de los adultos detenidos”.

2.1.5.3. Según el código penal de adolescentes

Garantías:

- Principio pro adolescente: “En caso de conflicto entre dos o más normas aplicables a un adolescente imputado, se debe optar por aquella que más favorezca sus derechos, ya sea la más amplia o aquella interpretación que sea más extensiva”. De igual manera, cuando “exista un conflicto entre el interés superior del adolescente y otros intereses o derechos, la autoridad competente analizará y ponderará los derechos, teniendo en cuenta que los derechos del adolescente son de interés superior y primordial consideración”. (Artículo III)
- Principio educativo: La medida adoptada para un adolescente debe contribuir al “fortalecimiento de su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de los demás. Se debe fomentar la reintegración del adolescente para que pueda desempeñar un papel constructivo en la sociedad”. (Artículo IV)
- Principio de justicia especializada: El proceso de responsabilidad penal del adolescente se distingue del proceso de adultos debido a su mayor protección de los derechos y garantías de los adolescentes. “La aplicación de este Código está a cargo de funcionarios especializados en la materia, capacitados en Derechos Humanos, particularmente en la CDNy en los instrumentos internacionales ratificados por Perú” (Artículo V)
- Principio de desjudicialización o mínima intervención: Según lo dispuesto en este Código y cuando se considere necesario, se deben tomar medidas para “evitar someter al adolescente a un proceso judicial o para poner fin al mismo sin recurrir al juicio oral”. Esto debe hacerse respetando los derechos del adolescente y teniendo en cuenta, en lo pertinente, el interés de la víctima. (Artículo VI)

- Debido Proceso: Todo adolescente tiene el derecho inalienable e irrestricto a ser informado de sus derechos, a recibir una comunicación inmediata y detallada sobre los cargos formulados “en su contra, y a ser asistido por un abogado defensor de su elección o, en su defecto, por un defensor público desde el momento en que es citado o detenido por la autoridad competente”. “También tiene derecho a disponer de un tiempo adecuado para preparar su defensa, a ejercer su autodefensa material, a participar en la actividad probatoria en igualdad de condiciones y, conforme a lo estipulado por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes”. El ejercicio del derecho de defensa se aplica en todas las etapas del proceso, según lo dispuesto por la ley y en el momento que esta señale. (Artículo VII)
- Principio de presunción de inocencia: Se considera que el adolescente “sometido al proceso de responsabilidad penal es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante los medios establecidos en este Código” (Artículo VIII)
- Principio acusatorio: En el proceso de responsabilidad penal del adolescente, se aplica el principio acusatorio, donde el Ministerio Público es el titular de la acción de persecución de la infracción, excepto en los casos de delitos que requieren una acción penal privada. (Artículo IX)
- Principio de confidencialidad: Todas las acciones judiciales y fiscales son confidenciales. Las autoridades y los sujetos involucrados en el proceso de “responsabilidad penal no pueden divulgar el contenido de las actuaciones o diligencias procesales, ni proporcionar información que permita identificar al adolescente, a su familia o circunstancias específicas”. (Artículo X)
- Principio de proporcionalidad y racionalidad: “La decisión tomada ante la comisión de una infracción por parte de un adolescente

debe ser proporcional no solo a las circunstancias y gravedad del delito, sino también a su situación y necesidades particulares” (Artículo XI).

Derechos:

Los derechos del adolescente, según lo establecido en el Artículo 19, son los siguientes:

- “Tener asistencia de un defensor especializado desde su detención policial hasta el cumplimiento de cualquier medida socioeducativa”.
- Ejercer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos otorgados por la Constitución y las leyes desde el inicio de las investigaciones hasta el final del proceso.
- “Ser interrogado por la Policía únicamente en presencia de su abogado defensor, invalidándose cualquier declaración hecha sin esta presencia”.
- Recurrir al Juez de la Investigación Preparatoria si considera que sus derechos no son respetados durante las diligencias preliminares o la investigación.
- No generar antecedentes policiales, penales o judiciales durante el proceso de responsabilidad penal.
- “Ser ubicado en un ambiente adecuado y separado de los adultos durante su detención y conducción a la dependencia policial”.
- “Que las decisiones sobre medidas cautelares, alternativas al proceso y audiencias se resuelvan en audiencia oral con su abogado defensor presente”.
- “Que la privación de libertad sea una medida excepcional y de corta duración”.

- Ser acompañado y evaluado por un Equipo Técnico Interdisciplinario.
- Ser escuchado en todas las etapas del proceso y hacer peticiones libremente ante el Juez en una audiencia oral.
- Recibir asistencia para comprender el idioma castellano y expresarse adecuadamente.
- Contar con un intérprete si el castellano no es su idioma principal, así como traducción de documentos cuando sea necesario.
- Ser interrogado en castellano o mediante un traductor o intérprete.
- Presentar medios de impugnación a través de su abogado defensor.
- “Comunicarse con las autoridades consulares correspondientes”.
- “Recurrir cualquier decisión tomada por autoridad administrativa o judicial”.

2.1.5.4. Garantías del proceso

Se ha señalado que el adolescente infractor está sometido a un proceso especial y, como tal, tiene derecho a una serie de garantías, las cuales son:

- “El principio de legalidad (sine poena, sine lege) establece que ningún adolescente puede ser procesado ni sancionado por un acto u omisión que, en el momento de cometerse, no esté expresamente calificado como una infracción punible en las leyes penales de manera clara e inequívoca”. Además, ninguna medida

socioeducativa puede ser impuesta si no está contemplada en el Código de los Niños y Adolescentes¹³

- El principio de confidencialidad y reserva del proceso garantiza que los datos relacionados con los actos cometidos por los adolescentes infractores sean confidenciales. Se debe proteger en todo momento la imagen e identidad del adolescente, y el proceso judicial relacionado con los adolescentes infractores debe mantenerse reservado. Además, cualquier información proporcionada, incluidas las estadísticas, no debe infringir el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad.
- La rehabilitación es un objetivo fundamental del sistema de justicia para adolescentes infractores, orientado hacia su bienestar y reintegración en la sociedad. La medida adoptada para la rehabilitación no solo considera la gravedad del acto cometido, sino también las circunstancias personales del adolescente.
- En los procesos judiciales que involucren a adolescentes infractores, se respetarán las garantías establecidas en la Constitución Política del Perú, la CDN, el Código de los Niños y Adolescentes, así como las leyes vigentes relacionadas con la materia.
- El artículo VII del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes establece que en la interpretación y aplicación de dicho código se tomarán en consideración los principios y

¹³ Mary Beloff “Algunas confusiones en torno a las consecuencias jurídicas de la conducta transgresora de la ley penal en los nuevos sistemas de justicia juvenil latinoamericanos” citado por GARCÍA MENDEZ, Emilio en “Adolescentes y Responsabilidad Ad Hoc” Buenos Aires. 2001.

disposiciones de la Constitución Política del Perú, la CDNy otros tratados internacionales ratificados por el país. Además, señala que las normas del Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal se aplicarán de manera supletoria cuando corresponda.

- Asimismo, se establece que en el caso de niños y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos, comunidades nativas o indígenas, además de cumplir con el Código de los Niños y Adolescentes y la legislación vigente, se respetarán sus costumbres, siempre y cuando estas no sean contrarias a las normas de orden público¹⁴.

2.1.5.5. Principios de la administración de justicia aplicables al adolescente infractor en el sistema jurídico peruano

Principio de la dignidad humana

Debe considerarse a las personas como fines en sí mismos y no como instrumentos o medios; la noción de dignidad humana está asociada a este principio, siendo todos sus derechos fundamentales anteriores y superiores al Estado y su menoscabo, eliminación destrucción o supresión lesionan la misma.

De ella se deriva el principio de autonomía ética de la persona o libertad del individuo frente al Estado, y en el ámbito penal ésta autonomía fundamenta la responsabilidad penal entendida como la capacidad personal de

¹⁴ Defensoría del Pueblo. Sistema Penal Juvenil. Informe Defensorial N° 157-2012/DP. Lima. 2012. Pág. 29

responder por las propias acciones que están dentro del contexto particular social del individuo.

Principio de la legalidad de la ley penal

Es el principio que fundamenta y orienta la intervención punitiva del Estado frente a los comportamientos de los individuos que vulneran lesionan o ponen en peligro determinados bienes jurídicos considerados esenciales para la convivencia pacífica y que deben ser protegidos por el ordenamiento jurídico y la sociedad.

Este obliga al legislador a describir las conductas prohibidas (típicas) y a establecer sus consecuencias jurídicas, que son las penas o medidas socioeducativas en una norma jurídica (ley penal), es decir “no hay delito sin ley previa”.

Es importante mencionar que la aplicación de este principio para los menores de 18 años (Perú), es un cambio positivo y hasta revolucionario dentro de la concepción tradicional del anterior diseño de la “situación irregular” puesto que en éste el juzgador podía disponer inclusive coactiva y aun arbitrariamente de la libertad de un niño o adolescente bajo el criterio y calificativo de encontrársele en situación de abandono o peligro material o moral, con el agravante de no estar determinado el plazo de privación de libertad teniendo como único tope o límite para el cumplimiento de la medida, el alcanzar la mayoría de edad por el niño o adolescente. Se vulneraba los derechos del niño por carecer éste de familia, vivienda, escuela, alimentación atención de salud o vestido, sin importar que él no hubiera cometido infracción penal alguna y por el contrario era tratado como si la hubiese perpetrado.

Principio de jurisdiccionalidad y prohibición de condena en ausencia

Por él queda prohibida aplicar o imponer una pena a nadie que no haya sido sometido a un proceso penal criminal bajo las reglas de un debido proceso (igualdad entre las partes, respecto a los derechos y garantías del imputado): ello está contemplado en nuestra Constitución pues el estado jurídico de inocencia sólo puede destruirse dentro de un proceso judicial con el debido ejercicio del derecho de defensa y demás garantías.¹⁵

Principio del debido proceso

Es el más importante de la función jurisdiccional, pero no explayare sobre el mismo por escapar al motivo de la presente investigación, pasaré a mencionar brevemente su contenido: el mismo surge como una válvula reguladora entre la libertad individual y las posibles imposiciones de la autoridad estatal, sobre la consideración de la existencia de conflictos entre los particulares y aquello, encausando la resolución de los mismos a través de procedimientos legales, siendo su finalidad última reconocer a los justiciables la garantía de un proceso transparente en materia judicial penal.

Principio de la inviolabilidad de la defensa

Derivado del principio fundamental del debido proceso, la defensa técnica puede ser ejercida desde la etapa de la investigación policial y durante todo el proceso judicial inclusive, así el Abogado Defensor es el llamado a disminuir, modificar o levantar los cargos en contra de sus patrocinados, además de controlar la legalidad del actuar policial, fiscal, judicial, y de las

¹⁵ PRADO SALDARRIAGA, Víctor, "Política Criminal Peruana", Lima, Perú. Cultural Cuzco S.A., Editores, 1985, p. 45

partes involucradas, así como velar por el respeto a los derechos fundamentales de sus patrocinados.

El conocer las imputaciones penales contra un adolescente infractor y las pruebas o evidencias que se aportan, permiten a su defensa técnica prepararse adecuadamente, siguiendo el modelo procesal penal acusatorio de aplicación nacional.

Principio de presunción de inocencia

Garantía del infractor procesado y/o ya acusado de ser autor o partícipe de un hecho previsto en la ley como delito o falta, tratándose en realidad de un estado jurídico de inocencia. Mediante la actividad acusatoria y sus facultades de investigación el Ministerio Público puede debilitar este principio con un mínimo de prueba razonable que vincule con certeza el suceso y el sujeto presunto autor. En cada etapa de la investigación se presentan las mismas características.

Principio de derecho a la libertad personal y lo excepcional de la detención

La libertad personal es un derecho humano muy importante, siendo por esencia y sustancia prohibida la privación ilegal y arbitraria de ella, caso contrario existe el derecho de ser informado de las razones de la detención (denominada retención para adolescentes infractores), a comunicarse con su familia y Abogado Defensor.

Teniendo siempre presente el carácter excepcional de la medida de detención preventiva. Cuando se da la situación de flagrancia la policía para limitar la libertad personal de oficio respecto al adolescente infractor implicado en el hecho, para ello debe tratarse de caso grave, investigarse inmediatamente y el adolescente ser puesto a disposición del Ministerio Público en el plazo máximo de 24 horas.

Principio de derecho a no ser incomunicado y lo excepcional de la incomunicación

La incomunicación es una medida cautelar personal que solo puede ser dispuesta por el órgano del poder judicial competente cuando resulte indispensable para el esclarecimiento del hecho investigado y no alcanza sus efectos a restringir la función del abogado defensor.

Principio de humanidad de las medidas y orientación a la rehabilitación

Las medidas o sanciones del sistema penal juvenil deben tener un componente esencialmente educativo, con respeto a los derechos de los adolescentes y a su dignidad como seres humanos. Ese binomio humanidad -dignidad impide las penas y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, prohíbe las penas desproporcionadas, las penas perpetuas y la muerte para los adolescentes infractores, a quienes en sus programas educativos de rehabilitación se busca privilegiar con las medidas que se efectivicen en libertad, lo cual resulta coherente con el sentido de última razón de ser de la medida socioeducativa de internación.

Asimismo el componente socio-educativo de las medidas en la lógica de la protección integral es para fortalecer la posición de los adolescentes y jóvenes en la sociedad que por diversas razones y motivos se vieron involucrados en hechos contrarios a la ley penal, este componente es un derecho más de los niños y jóvenes para su rehabilitación e incorporación en la sociedad, donde el Estado cumpla implementando adecuadas políticas correccionales en concertación con las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el quehacer de los adolescente infractores.

Cabe mencionar que cuando el Código se refiere a la evaluación de las circunstancias personales del adolescente infractor para la determinación de la medida, debe entenderse que aquella no puede ser considerada nunca para agravar la sanción sino que es garantía fortalecedora de la posición jurídica del adolescente reforzando sus derechos.

Implica a su vez que el sistema jurídico aplique a cada caso concreto el principio de “corresponsabilidad” de la sociedad y el Estado ante las infracciones penales y sus autores juveniles.

2.1.6. Privación de la libertad a niños o adolescentes infractores

Siendo un sistema de derecho penal de mínimo intervención en los asuntos de infractores, la Convención también desarrolla el principio de la “última ratio” o motivo último sobre la privación de la libertad, su recorte en desmedro de un niño o adolescente infractor debe ser el último recurso a aplicársele para conseguir los fines del sistema penal y por ende las medidas a ser ejecutadas en goce de libertad deben ser en lo posible las preferentemente utilizadas y al privación de tal libertad sólo aplicada como alternativa final. Inclusive se considera que este carácter alternativo demuestre al sistema de justicia penal que todas las demás alternativas ya fueron intentadas o sino racional y equitativamente descartadas; y socio jurídicamente visto se aprecia la doctrina de la INCOMPLETITUD institucional que dentro de la norma internacional por contrario busca eliminar las diferencias entre el mundo libre y el de recorte de la libertad, utilizando en lo posible servicios de la comunidad normales, entre ellos: ordenes de orientación y supervisión a determinados centros especializados, asesoramiento, libertad vigilada, colocación en hogares de guarda o sustitutos, programas de enseñanza y formación técnico u ocupacional.

También se debe recalcar que la Convención dispone la prohibición de las detenciones arbitrarias, la sujeción al principio de legalidad, y el menor plazo legal posible de la privación de la libertad de los infractores.

El Código de Responsabilidad Penal establece que la medida de privación de Libertad, solo es excepcional según su artículo:

Artículo 6.- Excepcionalidad de la Privación de libertad

La privación de libertad del adolescente, aun cuando sea preventiva, tiene carácter excepcional y debe estar debidamente fundada, es aplicada como medida de último recurso. La fundamentación de la medida debe señalar el motivo por el cual no es posible aplicar una medida alternativa. La duración de la privación de libertad debe ser la más breve posible.

Para aplicarse la medida de prisión preventiva se tiene que actuar con proporcionalidad, un control de garantías pues aquí existirá una pugna entre esta medida y los derechos fundamentales que tutelan a los adolescentes. En este caso el derecho a la libertad del adolescente infractor se debe evaluar al daño cometido, la pena a imponerse del delito y los elementos graves y fundados de convicción. Arias & Lopera (2010)

Internacionalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha el 2 de septiembre de 2004 en el Caso “Instituto de Reeducción del Menor” contra. Paraguay conceptuó:

En el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Dichas medidas pueden ser, inter alia, la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa, así como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, los programas de enseñanza y formación profesional, y otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones. La aplicación de estas medidas sustitutorias tiene la finalidad de asegurar que los niños sean tratados de manera adecuada y proporcional a sus circunstancias y a la infracción. Este precepto está regulado en diversos instrumentos y reglas internacionales.¹⁶

La Sección III del Código de Responsabilidad Juvenil, rige la actividad probatoria, específicamente en el Título II regula los Capítulos II “La Detención”; en el Título IV sobre la internación preventiva, este título cuenta con cuatro capítulos: Disposiciones generales, duración de la internación preventiva, prolongación del plazo de la internación preventiva, capítulo IV, la variación de la internación preventiva.

2.1.6.1. Consecuencias

Perú:

En el 2013 los Directores del Centro Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación de Lima, centro Juvenil Santa Margarita y del Servicio de Orientación al Adolescente Rímac expresaron:

¹⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 2 de septiembre de 2004, p. 115.

En base al conocimiento acumulado durante más de 13 años de experiencia, las intenciones con duración superior a 3 años implican una serie de limitaciones, que finalmente, dificultan el proceso de reinserción social después de haber superado las etapas de desarrollo previstas en los programas para medio cerrado del Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor”.¹⁷

El aumento en el número de adolescentes internos representa un desafío significativo en la gestión de las instalaciones correccionales, ya que los recursos y el personal especializado no son suficientes para proporcionar un control adecuado y un apoyo individualizado a cada adolescente. El hacinamiento en estas instalaciones se ha vuelto cada vez más evidente, ya que la cantidad de adolescentes infractores que llegan sigue aumentando.

Una de las principales dificultades en este contexto de privación de libertad es que la mayoría de los infractores ingresan al sistema cuando aún están en la secundaria. Esto significa que, con las nuevas penas establecidas en el código de responsabilidad penal de adolescentes, es poco probable que puedan continuar con sus estudios universitarios hasta que cumplan su condena. Es importante destacar que, especialmente en casos de delitos graves, la pena de internación puede extenderse hasta 10 años para menores de 16 años.

Chile

¹⁷Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito. (2013) La Justicia Juvenil en el Perú. Lima, Perú. Extraído de:
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Informes/Justicia_Juvenil_Peru_2013_Final.pdf

En el contexto de la internación preventiva de adolescentes, Chile también enfrenta esta situación crítica:

Aun cuando sabemos por experiencia que la cárcel es una pena que quebranta, deforma y mutila al individuo, allí donde es más difícil de sanarle, en el espíritu; aparece en el sistema chileno que implementa la nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente, no como una excepción forzosa en circunstancias extremas (como el último recurso), sino más bien, como una medida recurrente. Según hemos observado, el encierro, para un joven de entre 14 y 18 años, no sólo será la oportunidad de sufrir la más cruda zozobra a la que se puede someter a un ser humano, sino que además, el daño que ocasiona dejará huellas profundas y permanentes en todas aquellas áreas que le son indispensables para integrarse socialmente (...) Desde el punto de vista emocional y afectivo, se les separa a los jóvenes no sólo de su familia de origen, sino que se les aleja de la posibilidad de desarrollar naturales acercamientos con sus pares del sexo opuesto, constriñendo hasta el punto de la atrofia las oportunidades de desarrollo afectivo-sexual. Esta dimensión tendrá otras manifestaciones muy crudas y concretas.¹⁸

2.1.7. Medidas socioeducativas

En el Código de los Niños y Adolescentes, se ha adoptado el término "medida socioeducativa" del Estatuto del Niño y el Adolescente de Brasil (Ley 8069, 1990). Sin embargo, es relevante notar que no existe una definición uniforme de este término en los distintos cuerpos normativos de América Latina. Por ejemplo, en el Código de Menores de Colombia se denominan "medidas de rehabilitación" o simplemente "medidas" en su

¹⁸ Privación de libertad adolescente en Chile, una reflexión desde la praxis. Hugo Muñoz Jaramillo y Francisco Ubilla Pavez, 2009.

artículo 195. De manera similar, en el Código de la Niñez y la Juventud de Guatemala, así como en la legislación de República Dominicana, se les conoce simplemente como "medidas". En el caso del Código del Niño, Niña y Adolescente de Bolivia, se utilizan el término completo "medidas socioeducativas" (BELOFF, Mary).

En el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, Ley 27337, no se proporciona una definición explícita de las medidas socioeducativas. Sin embargo, se establece en el artículo 229 que estas medidas tienen como objetivo la educación del adolescente, y en el artículo 230 se especifica que al aplicarlas se debe considerar la capacidad del adolescente para cumplirlas. Por otro lado, en la doctrina de la situación irregular, se puede encontrar un concepto más detallado de las medidas socioeducativas.

El artículo 150 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (DL 1348) expone el propósito de las medidas socioeducativas.

Las medidas socioeducativas están diseñadas para tener un enfoque educativo y formativo positivo, con el objetivo principal de promover la resocialización y la reintegración del adolescente en la sociedad. Al elegir y definir la medida socioeducativa adecuada, se debe priorizar aquella que tenga el mayor impacto educativo en los derechos del adolescente y que contribuya de manera más efectiva a su reintegración.

De acuerdo a Mendizábal Oses "son aquellas en las que la finalidad esencial no es la de penar ni la de intimidar a los menores, así como tampoco la de reprobar socialmente la conducta de quien se encuentre en situación irregular porque fundamentalmente se trata de proteger jurídicamente al menor contra el medio ambiente que nocivamente influye en su comportamiento y contra las tendencias o

inclinaciones perturbadoras de su normal desarrollo personal que motivan indudables desajustes a su convivencia con los demás por ello la finalidad esencial de éstas medidas es de prepararle eficazmente para la vida” (MENDIZABAL, 1977).

De acuerdo Welsh, J (2012): *“Las estrategias legales de cómo el Sistema de Administración de Justicia Penal Juvenil ha establecido la ejecución de las sanciones judiciales (llamadas medidas socioeducativas en las legislaciones Latinoamericanas) son variadas y heterogéneas según el ordenamiento jurídico penal de los países”*.¹⁹

De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, se definen una serie de criterios para la determinación de la medida socioeducativa que debe aplicarse en cada caso. Estos criterios incluyen consideraciones como la gravedad de la infracción cometida, el impacto del daño causado, el nivel de participación del adolescente en el delito, su edad al momento de cometerlo, así como la adecuación y pertinencia de la medida en función del interés superior del adolescente y el enfoque educativo. También se evalúa la capacidad del adolescente para cumplir con la medida, su disposición para reparar el daño, la situación familiar en la que se encuentra y sus condiciones personales y sociales.

En Latinoamérica, el término "medida socioeducativa" ha perdurado, incluso en las legislaciones que se adhieren a la doctrina de la protección integral. Esto se debe a una resistencia tanto en la ley como en la jurisprudencia para reconocer la naturaleza penal de estas medidas, a pesar de estar relacionadas con la situación irregular.

¹⁹ Welsh, J; Schmidt, F; Mckinnon, L; Meyers, C; Meyers, J. (2008) A Comparative Study of Adolescent Risk Assessment Instruments: Predictive and Incremental Validity.104-115. William, D. B. & Piquero, A.R., (2012). Assessing the impact of imprisonment on recidivism.

2.1.7.1. Regulación jurídica de las medidas socioeducativas

"A nivel nacional se encuentran diversas normativas que regulan los derechos y responsabilidades de los niños y adolescentes, entre las cuales destacan la Constitución Política del Perú, específicamente en sus artículos 2 y 4, el Código Penal Peruano en su artículo 20, el Código del Niño y Adolescente (Ley N° 27337), así como el Decreto Legislativo 1348 que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con especial atención a sus secciones VII y VIII".

"A nivel internacional, se encuentran tratados y convenciones que protegen los derechos de la infancia y adolescencia, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención Universal de los Derechos Humanos."

2.1.7.2. Clasificación de las medidas en nuestro ordenamiento

El artículo 156 del Código de Responsabilidad Penal Juvenil establece diferentes tipos de medidas socioeducativas, se mencionan a continuación:

Medidas socioeducativas no privativas de la libertad

Libertad Asistida: "Modalidad de intervención educativa, para aquellos adolescentes derivados de la Autoridad Judicial con medida socioeducativa de Libertad Asistida por un máximo de ocho meses. Se asigna un educador quien será el responsable de brindarle orientación, supervisión y promoción tanto al adolescente infractor como a su familia, en medio abierto".

Libertad Restringida: “Modalidad de intervención educativa, para aquellos adolescentes derivados por la Autoridad Judicial con medida socioeducativa de Libertad Restringida por un máximo de doce meses. Consiste en la asistencia y participación diaria y obligatoria del adolescente y semanal para la familia o responsable al Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), a fin de recibir orientación y educación”.²⁰

Prestación de Servicios a La Comunidad: Modalidad de intervención educativa, por medio de la cual “el adolescente se compromete a cumplir determinadas tareas acordes a su aptitud, sin perjuicio de su salud, escolaridad o trabajo habitual, por un periodo máximo de seis meses; tiempo durante el cual se supervisará y reforzará su desenvolvimiento familiar, social, laboral y de estudios”.

Amonestación, es una medida socioeducativa en la que el Juez, de forma oral, advierte al adolescente sobre la importancia de respetar las normas de convivencia social. Esta advertencia debe ser clara y directa, de modo que tanto el adolescente como sus responsables entiendan la gravedad de sus acciones ilícitas.

La aplicación de la amonestación está sujeta al cumplimiento de medidas accesorias que pueden ser impuestas por un

²⁰ JAKOBS, Gínther, Derecho Penal Parte General. Fundamentos y [Teoría](#) de la Imputación Objetiva. Trad.P.98.

período máximo de seis (06) meses, según lo establecido en el Artículo 158.

Medidas educativas sociales que implican la privación de la libertad.

Internamiento: Consiste en la última medida socioeducativa establecida por el ámbito jurisdiccional, según lo estipulado en el Código del Niño y del Adolescente. Se aplica en situaciones que involucren a adolescentes con comportamientos severos que no pueden ser tratados de manera ambulatoria. En estos casos, se determina el internamiento con el propósito de brindarles un adecuado apoyo multidisciplinario, con el fin de modificar su conducta inapropiada y proporcionarles orientación y asesoramiento psicosocial continuo, conforme al Sistema de Reinserción Social.²¹

La duración del internamiento se encuentra regulada por el artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, estableciendo períodos mínimos y máximos según la gravedad de los delitos. Por ejemplo, para delitos como el Sicariato (Art. 108-C) o la Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (Art. 173-A), la medida de internamiento varía según la edad del adolescente, siendo de ocho (08) a diez (10) años para aquellos que tienen entre 14 años y menos de dieciséis, y de igual manera para los que tienen entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad.

²¹ Fidel de la Garza "La cultura del menor infractor" Editorial Trillas, México. 1987

El Poder Judicial implementa el Sistema de Reinserción del Adolescente Infractor (SRAI) para la aplicación de estas medidas socioeducativas. Este sistema contempla una serie de programas diseñados para su ejecución tanto en el Sistema Cerrado (internamiento) como en el Sistema Abierto. El enfoque del sistema penal juvenil en el Perú se centra en lograr una rehabilitación que facilite la reintegración social y productiva del adolescente, y no simplemente en la imposición de sanciones²². A pesar de los avances alcanzados en este sentido, todavía queda un largo trecho por recorrer para alcanzar la paz social, dado que el problema es complejo y requiere la participación comprometida de todos los sectores de la sociedad.

2.1.7.3. Cifras

Según el poder judicial:

Durante el año 2016, según datos del Poder Judicial, se atendieron a un total de 3,632 adolescentes infractores a nivel nacional. De este grupo, el 60% (2,168 adolescentes) fueron privados de libertad, mientras que el 40% restante (1,464 adolescentes) recibió atención en un servicio ambulatorio. La mayoría de los infractores fueron adolescentes varones, representando el 94%, mientras que el 6% restante fueron adolescentes mujeres.

En cuanto a las infracciones a la ley penal más frecuentes, se observa que el robo y robo agravado ocupan el primer lugar, con un 41.66%, seguido por el hurto con un 15.56%, la violación sexual

²² JIMÉNEZ, Nydia. Causas de Criminalidad en los menores, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1978

con un 15.31%, y el homicidio en todas sus variantes con un 5.95%. La edad promedio de los adolescentes infractores fue de aproximadamente 17 años, abarcando alrededor del 30.42% de la población total.

Entre los internados, unos 220 (6.10%) fueron por asesinatos, de los cuales 14 permanecen bajo el régimen abierto y 206 bajo uno cerrado (privados de la libertad). Además, 563 infractores (15.42%) se encuentran en estos albergues por violación sexual, de los cuales 200 están en un medio abierto y 363 en uno cerrado.²³

2.1.8. Investigación fiscal de delitos cometidos por adolescentes

2.1.8.1. Autoridades competentes

Las autoridades competentes para el manejo de casos relacionados con la responsabilidad penal adolescente incluyen al Ministerio Público, específicamente la fiscalía provincial, y a la Policía Nacional, que puede actuar a través de sus comisarías o unidades especializadas.

El procedimiento de “investigación fiscal está normado por el Código de Responsabilidad Penal Adolescente, específicamente en el Título II, Capítulo I, titulado El Ministerio Público”. En este apartado se detallan las funciones, atribuciones y obligaciones del Fiscal, así como los lineamientos para llevar a cabo una investigación en la sede fiscal. El Capítulo II “La Policía Especializada”, en el artículo 6 especifica que: *“Es un órgano especializado dependiente de la Policía Nacional del Perú - PNP, que interviene exclusivamente en aquellas causas en las que el imputado es un adolescente. Debe estar capacitada para el tratamiento de adolescentes,*

²³ Diario La Republica. Lima. 04 de abril de 2017. <http://larepublica.pe/reportero-ciudadano/862082-adolescentes-infractores-si-reciben-castigos-severos-en-el-peru>

en base a los principios de la protección integral de derechos y el enfoque de género”. El artículo 17 regula cuales son las funciones de la policía especializada y el artículo 18 la reserva de identidad del adolescente.

2.1.8.2. Denuncia penal

La denuncia penal constituye el procedimiento inicial previo a la intervención judicial, iniciado con la notificación de un presunto delito, ya sea ante la Policía Nacional o el Ministerio Público. Su objetivo es descubrir la verdad detrás del evento delictivo y las circunstancias que lo rodean, identificar a los autores, evaluar el daño causado y llegar a conclusiones basadas en una investigación eficaz.

Se establecen criterios fundamentales para este proceso, incluyendo la oportunidad, diligencia, prontitud, imparcialidad, protección de la escena del crimen y la formación de un equipo interdisciplinario cuando sea necesario. La denuncia puede ser verbal o escrita, y también puede ser realizada a través de medios de comunicación.

Cualquier persona natural o jurídica que haya sido víctima de un delito puede presentar una denuncia, así como aquellas personas obligadas por ley a denunciar cualquier hecho criminal del que tengan conocimiento debido a su cargo o función.

2.1.9. Resocialización del menor infractor en Perú y Latinoamérica

El Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal se lleva a cabo mediante dos modalidades: Medio Cerrado y Medio Abierto, ambas basadas en Programas Educativos. Las estrategias de intervención incluyen la participación activa del adolescente en el proceso educativo, la reinserción como un proceso gradual en los aspectos personal, social y laboral, la coordinación constante con los Juzgados de Familia y diversas instituciones públicas y privadas, así como con la comunidad en general. Se prioriza la

intervención tanto personalizada como grupal, se involucra al entorno familiar en el proceso y se promueve el acercamiento y la comprensión. Además, se fomenta el trabajo en equipo e interdisciplinario, se crea un ambiente acogedor y se desarrollan actividades recreativas y educativas dirigidas. Se brinda acompañamiento formativo constante, se realiza un seguimiento continuo y se cuenta con personal comprometido, sensible y capacitado. Se emplean refuerzos positivos y se aprovechan las redes sociales de apoyo disponibles.

Según Óscar Vásquez, quien coordina “el programa de Justicia Restaurativa de Tierra de Hombres para Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay”, la medida de resocialización está teniendo éxito en Perú, aunque no de manera uniforme en todos los centros. Por ejemplo, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como "Maranguita", enfrenta dificultades para lograr este objetivo debido a problemas de infraestructura y a un creciente hacinamiento, según expresó explícitamente.

*"Felizmente el Perú ha abierto en los últimos años varios Servicios de Orientación al Adolescente (SOA). Hace unos años solo había uno en el Rímac que ofrecía la resocialización con medidas no privativas de libertad. Ahora hay 20 que permiten que no todos los adolescentes vayan a los centros juveniles cerrados sino que puedan rehabilitarse en medio abierto"*²⁴

La resocialización es la finalidad de la condena o medida socioeducativa que se da tanto en la legislación peruana como en la de Latinoamérica, Altschuler, D. & Brash, R. refiere que:

"La reinserción o reintegración social de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, es un proceso que constituye parte de todo Sistema de Justicia Penal Juvenil, en tanto representa el

²⁴ <https://peru21.pe/lima/90-infractores-adolescentes-rehabilita-necesidad-encierro-86598>

*mecanismo de ejecución de la sentencia y el sentido y la finalidad última de la misma*²⁵

Del mismo modo Upperton, R. & Thompson, A. opinan que:

*“Se priva de la libertad para intensificar la intervención, si bien ésta debe de ser de alta especialización y por el menor tiempo posible, pues la mejor forma de resocializar en los valores que previenen de la comisión de infracciones se aprenden a través de la vida en Sociedad, en condiciones de libertad, donde los/as adolescentes pueden ir ensayando las nuevas formas de comportarse según el estándar social preestablecido en base a los bienes jurídicos legalmente tutelados, así como integrarse a los mecanismos naturales de inserción social adolescente y juvenil, de la manera más “normalizada” posible”.*²⁶

Para Weatherburn, D. & Bartels, L. (2008), la rehabilitación de los adolescentes si puede ser posible en el ámbito que se desarrolle de una manera coordinada en lo jurídico-psicológico-social:

“En el caso de la atención o rehabilitación de la conducta antisocial juvenil se prefiere el medio abierto por ser un proceso de resocialización lo más normalizado posible, es decir, muy cercano a los procesos naturales y normativos (en el sentido que sigue la curva estadística normal de la población adolescente en general) del desarrollo adolescente, de manera que la rehabilitación y la reinserción no se produzca en el contexto de una ficción (como suele ser clasificado el medio cerrado), sino en el escenario mismo del

²⁵ Altschuler, D. & Brash, R. (2004). Adolescent and teenage offenders confronting the challenges and opportunities of reentry. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2(1), 72-87.

²⁶ Upperton, R. & Thompson, A. (2007). Predicting juvenile offender recidivism: Risk- Need assessment and juvenile justice officers. *Psychiatry, Psychology and Law*, 14(1), 138-146.

desarrollo social adolescente, en su comunidad, ejerciendo sus derechos y evitando el desarraigo, el estigma y el deterioro psicológico del encierro, adquiriendo por el contrario, aprendizajes basados en competencia social”l.²⁷

2.1.10. Análisis en relación a convención de Derechos del niño

La CDNde 1989 es un instrumento internacional que regula la protección de los derechos de los niños y fue adoptada por la Asamblea General en 1989. Según esta convención, se considera niño a cualquier persona menor de 18 años, y garantiza que sus derechos estén protegidos hasta esa edad. En caso de que un niño cometa un delito según las leyes nacionales, debe recibir un trato digno, proporcional y con garantías procesales durante todo el proceso judicial. La privación de libertad debe ser una medida excepcional, reservada para casos graves. Durante la internación en centros juveniles, el Estado debe asegurar las mejores condiciones para los adolescentes, velando por su interés superior y proporcionando seguimiento constante para su resocialización e integración en la sociedad una vez liberados. Las sentencias deben estar debidamente fundamentadas y la internación debe ser evaluada cuidadosamente para no infringir el derecho fundamental a la libertad individual.

2.1.11. Opinión de la CIDH sobre el tema

Responsabilidad penal juvenil y derechos humanos²⁸

Los fundamentos de los sistemas de responsabilidad penal juvenil en la CDN

²⁷ Weatherburn, D. & Bartels, L. (2008). The recidivism of offenders given suspended sentences in New South Wales, Australia. The British Journal of Criminology, 48(5), 667-683.

²⁸ Justicia y Derecho del niño, Número Dos. Buenos Aires. Pág. 77-91
https://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos2.pdf.

Los principios subyacentes en los sistemas de responsabilidad penal juvenil encuentran su base en la CDN. Esta convención, adoptada por las Naciones Unidas en 1989, establece un marco internacional para la protección de los derechos de los niños, reconociendo la necesidad de salvaguardar su bienestar y desarrollo integral. Dentro de estos principios, se destaca el interés superior del niño, que implica que cualquier medida tomada en relación con los niños debe priorizar su bienestar y protección. Asimismo, la convención enfatiza el derecho del niño a ser escuchado y a participar en todos los asuntos que le conciernen, incluidos los procesos judiciales. Además, se reconoce la importancia de garantizar la rehabilitación y reintegración de los jóvenes infractores en la sociedad, procurando alternativas a la privación de libertad siempre que sea posible. Estos fundamentos subrayan la importancia de adoptar enfoques centrados en el bienestar y desarrollo de los jóvenes, en consonancia con los principios de justicia y equidad.

La CDN(CDN) aborda la cuestión de la responsabilidad penal según la edad del individuo involucrado, reconociendo que existen diferencias entre la responsabilidad de un adulto y la de un niño o adolescente.

En América Latina, el enfoque sobre la responsabilidad penal de los menores no se desarrolló de manera sistemática por parte de los expertos o juristas, quienes a menudo consideraron este tema como secundario. El sistema de responsabilidad penal juvenil se refiere a cómo el Estado responde a los delitos cometidos por los adolescentes, pero aún no existe un consenso doctrinal sobre cómo debería ser este sistema.

El concepto de responsabilidad penal juvenil se construye cotidianamente y se basa en la noción de sujeto, que conlleva a una aproximación a la ciudadanía y la responsabilidad específica en relación

con los delitos cometidos. Sin embargo, en América Latina aún persisten debates falaces sobre este tema, como la reducción de la edad de imputabilidad. Aunque el modelo de responsabilidad penal juvenil a menudo se basa en modelos europeos, la discusión sobre este tema está más avanzada en la región que en otros lugares del mundo.

Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina se enmarcan en la protección integral de derechos, fundamentada en tres pilares: el fundamento filosófico, la concepción del derecho penal mínimo y la necesidad de reconocer que estos sistemas operan dentro del sistema penal, aunque con enfoques específicos para los jóvenes.

El reconocimiento de los niños como sujetos de derechos implica otorgarles los mismos derechos que a los adultos, además de derechos adicionales que tienen en cuenta su proceso de crecimiento. La discusión sobre la edad de imputabilidad se complica debido a la falta de claridad sobre lo que significa ser inimputable en el contexto de los sistemas de responsabilidad penal juvenil. Aunque los menores de 18 años no son sujetos de responsabilidad penal adulta, aún pueden ser considerados responsables en el marco de estos sistemas.

Aspectos críticos

Medidas judiciales para jóvenes infractores o intervenciones educativas y sociales

Resulta imprescindible discernir entre los conceptos de responsabilidad y culpabilidad; este ejercicio se vuelve especialmente complejo y profundo cuando se aborda desde una perspectiva comunicativa. En América Latina, se ha comenzado a plantear la noción de responsabilidad como algo distinto de la respuesta coercitiva aplicada a los adultos en el sistema penal. Sin embargo, si seguimos el entendimiento aquí desarrollado de

manera rigurosa, se evidencia que la noción de responsabilidad está ligada al concepto de sujeto responsable y sujeto de derecho; en contraste, la culpabilidad se refiere a la capacidad para ser sujeto de reproche jurídico penal. Estos no son términos intercambiables ni equivalentes.

Este discernimiento también influye en las consecuencias derivadas del comportamiento del infractor. En primer lugar, es importante cuestionar si las repercusiones legales son de naturaleza socioeducativa o punitiva. Los tratados internacionales no se refieren a penas, sino a sanciones penales juveniles. En América Latina, aún persiste la preferencia por el uso de ciertas palabras, y desde una perspectiva comunicativa, hablar de sanciones en lugar de medidas beneficiaría el debate. De lo contrario, se podría percibir la medida como algo positivo para el adolescente, perdiendo de vista la dimensión de reproche que implica. Por esta razón, las leyes más recientes están comenzando a referirse explícitamente a sanciones y sanciones penales juveniles.

La esencia de la sanción radica en su propósito fundamental: la prevención especial positiva, que se refiere a la resocialización y reeducación en el ámbito penal. La noción de educación, aunque crucial, aún queda pendiente en términos legales. En los tratados internacionales, la sanción se justifica principalmente como un medio para esta prevención especial positiva, un área en la que aún no hemos avanzado lo suficiente.

Por tanto, es esencial distinguir entre las sanciones y las medidas de protección, ya que ambas buscan abordar los obstáculos que enfrentan los adolescentes o niños en conflicto con la ley. La ambigüedad surge cuando algunas leyes mezclan estos términos,

aplicando medidas educativas por la infracción, pero también contemplando medidas de protección en casos donde se reconocen los derechos vulnerados del adolescente dentro del proceso penal.

Si consideramos que el fundamento de la sanción reside en la acción misma, entonces es importante examinar cómo influyen las circunstancias personales del niño en este proceso, como lo establecen todas las leyes. Desde esta perspectiva, estas circunstancias solo deberían influir en términos de vulnerabilidad, lo que implicaría una disminución en el reproche por la acción. Sin embargo, ninguna circunstancia personal debería tener un impacto más allá de esto.

Es común encontrar casos donde, aunque el acto en sí no sea grave, se aplique una medida excesiva debido al comportamiento problemático o violento del joven. Esta discrepancia entre la gravedad del acto y la medida aplicada es algo que aún no está completamente claro en las normativas internacionales y que requiere una mayor clarificación a través de la práctica judicial.

En otro orden de ideas, las sanciones en un sistema de responsabilidad penal juvenil son diversificadas por lo que es incorrecto hablar de alternativas a la pena privativa de libertad. Hablar en estos términos sería comprensible en el sistema penal de adultos porque en él la centralidad es la cárcel.

En cambio en éste, la centralidad la tienen todas las otras sanciones. Al hablar de alternativas a la prisión, seguimos considerando que la privación de libertad es el eje del sistema.

En la realidad actual de América Latina, aún persiste esta práctica que requiere ser abordada también desde el lenguaje y la semántica. Debemos dejar de referirnos a estas medidas como "alternativas", ya que las sanciones que se aplican son distintas, y

lo que realmente constituye una excepción, y por un período breve y específico, es la privación de libertad en un centro especializado. Es evidente que, en este aspecto, prevalece la confusión y la necesidad de una mayor clarificación.

Conclusiones: El impacto del sistema de responsabilidad penal juvenil en la transformación social.

La introducción de un sistema de responsabilidad penal juvenil debe entenderse dentro del marco más amplio de la expansión de la democracia, ya que ambas cuestiones se encuentran en el ámbito de dos consignas político-culturales. La tarea no se limita únicamente a abolir el modelo tutelar que ha influido en nuestra percepción de la infancia durante un siglo, sino que también implica dismantelar el sistema inquisitivo que ha moldeado nuestra visión de la criminalidad y hasta nuestra comprensión misma de la verdad.

En nuestro contexto, estas dos tareas son sumamente complejas y van más allá de simplemente reformar los sistemas de justicia. Se trata de modificar modelos, prácticas, actitudes y patrones cognitivos arraigados en nuestra sociedad. No es realista esperar que estos cambios se den únicamente a través de cambios legislativos, ya que nos encontramos con obstáculos en la implementación de nuevas leyes, incluso aquellas que buscan ser más equitativas. Estas dificultades están estrechamente relacionadas con la persistencia de modelos culturales arraigados que aún no han evolucionado.

Otro aspecto pendiente es el desarrollo de programas para la ejecución de sanciones penales juveniles, lo cual es crucial en el contexto de las campañas por la ley y el orden. En la región, no se han establecido experiencias sólidas en este ámbito, posiblemente

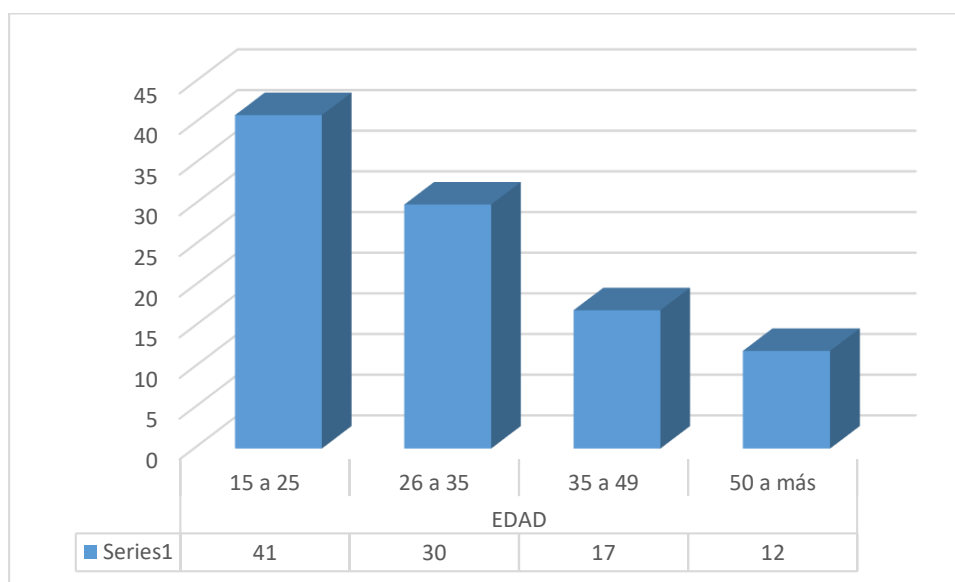
debido al poco tiempo transcurrido, pero tampoco se han registrado experiencias exitosas y convincentes de programas de educación para infractores juveniles ya condenados. La falta de atención a este aspecto conduce a presiones sobre los jueces por parte de la opinión pública, lo que a menudo resulta en el recurso a la privación de libertad como la única medida disponible. Por lo tanto, la falta de estos programas conlleva a una demanda de mayores penas de encarcelamiento.

CÁPITULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

I. ASPECTOS GENERALES

La encuesta contó con la participación de 100 encuestados de la ciudad de Chiclayo, quienes fueron seleccionados mediante la técnica de muestreo por conveniencia.

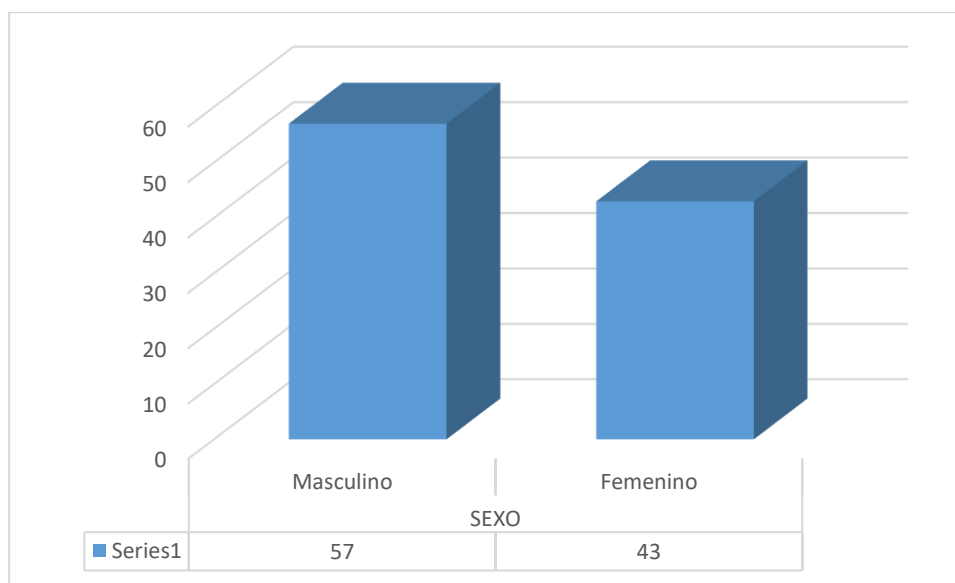
1.1. EDAD



Descripción:

“Que, con la finalidad de conocer el perfil de nuestros informantes, se les consultó su edad, la misma que se organiza en intervalos con opciones. La mayoría de nuestros informantes perteneces al intervalo de 15 a 25 años de edad, lo cual no refiere a muchos adolescentes y jóvenes, sobre quienes se realiza la investigación; no obstante con un número también mayoritario contamos con informantes de 26 a 35 años de edad, quienes están más inmersos en el conocimiento de la realidad actual de nuestro país; lo cual nos garantiza un correcto equilibrio de opiniones”.

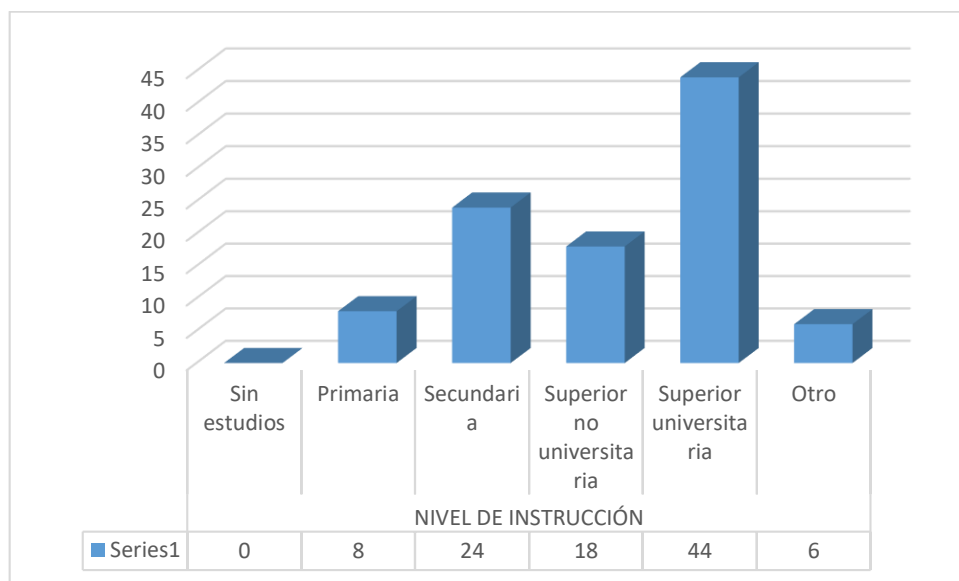
1.2. SEXO



Descripción:

“Que, nuestros informantes son en su mayoría del sexo masculino, no obstante la diferencia con la cantidad de informantes de sexo femenino no es mucha, lo cual no genera una brecha muy diferenciada”.

1.3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN

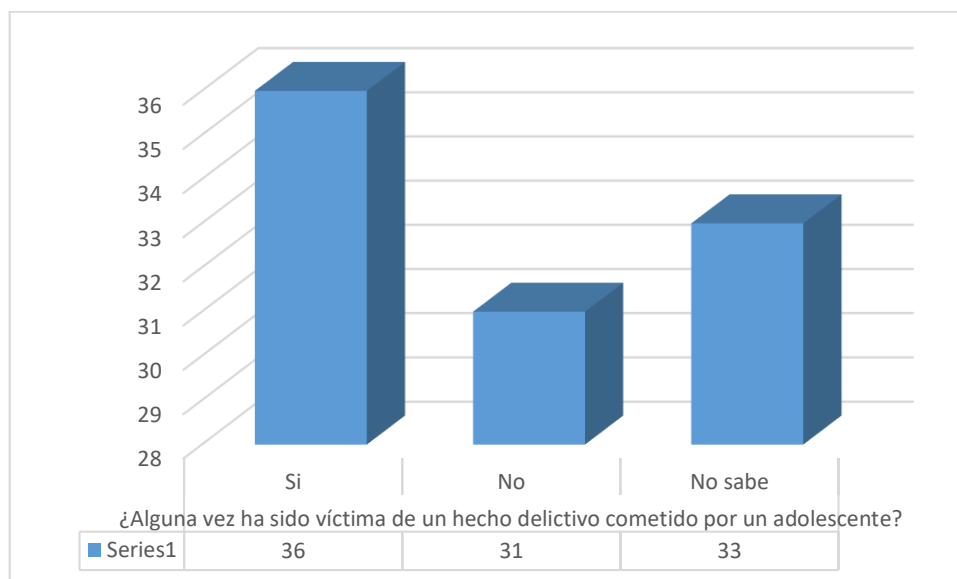


Descripción:

“Que, continuando con el perfil del informante, consultamos el nivel de instrucción; obteniendo que la mayoría de nuestros informantes poseen estudios superiores a nivel universitario, asimismo tenemos una gran cantidad de informantes de nivel de estudios secundarios, muchos de ellos aún en proceso de educación básica regular”.

II. RESPONSABLES: COMUNIDAD JURÍDICA

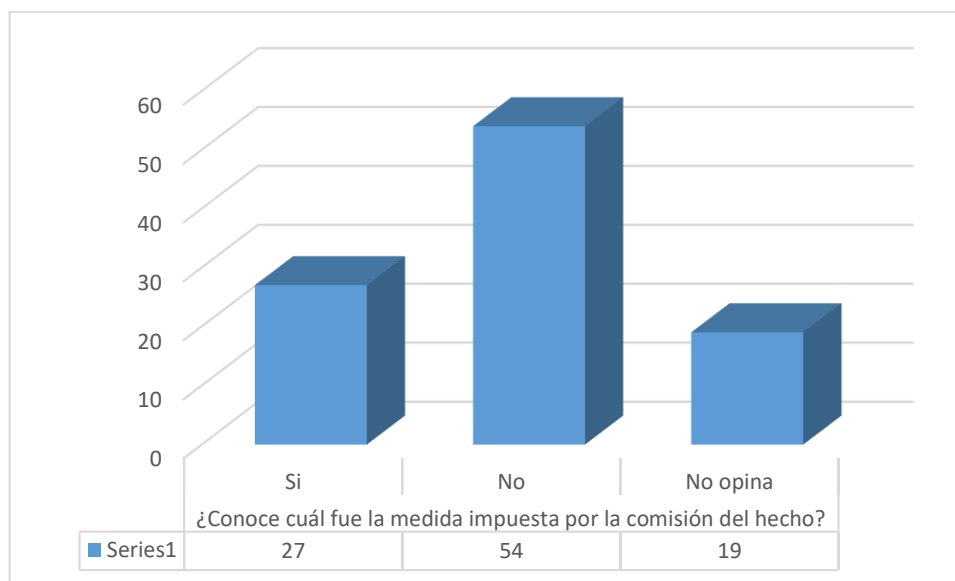
2.1. ¿Alguna vez ha sido víctima de un hecho delictivo cometido por un adolescente?



Descripción:

“Para comenzar con las preguntas de fondo, se consultó a los informantes si alguna vez habían sido víctimas de un hecho delictivo cometido por un adolescente. Las tres opciones de respuesta tuvieron casi el mismo porcentaje de respuesta, sin embargo la que obtuvo mayoría fue el Si, señalando que la mayoría de nuestros informantes habían sido víctimas de un hecho delictivo cometido por un adolescente. Asimismo un gran número 33 personas indicaron no saber, debido a que aparentemente parecían adolescentes, pero como no se les llegó a capturar en muchos casos no lo confirmaron”.

2.2. ¿Conoce cuál fue la medida impuesta por la comisión del hecho?

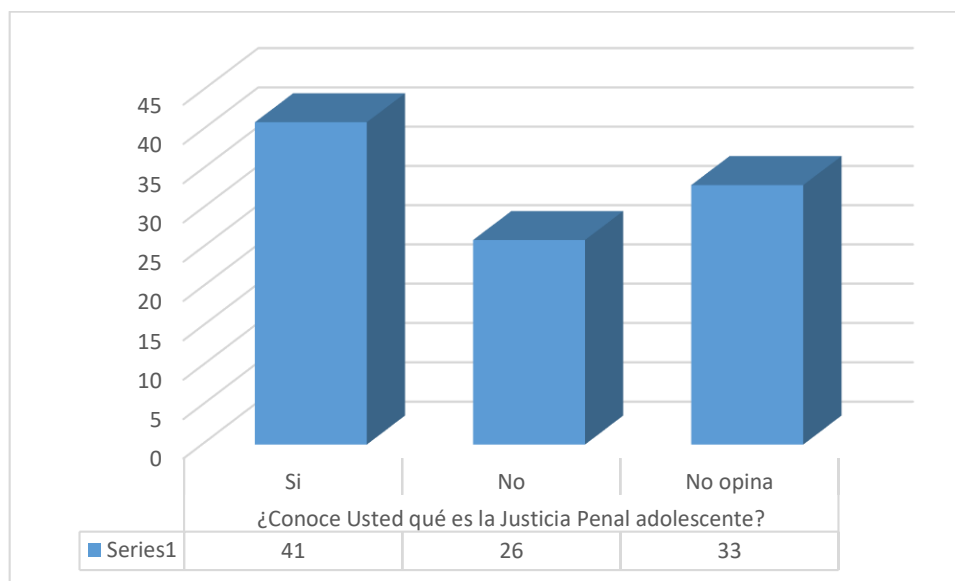


Descripción:

“Que, se les consultó a los informantes si conocían cuál había sido la medida impuesta al adolescente por el hecho delictivo cometido. La mayoría indicó no conocer cuál fue la medida, señalando que en muchas ocasiones los casos que incluyen a menores de edad no son muy expuesto, ni informados a los propios implicados. Otros indicaron que no conocían la medida debido a que no se les llegó a capturar”.

2.3. ¿Conoce Usted qué es la Justicia Penal adolescente?

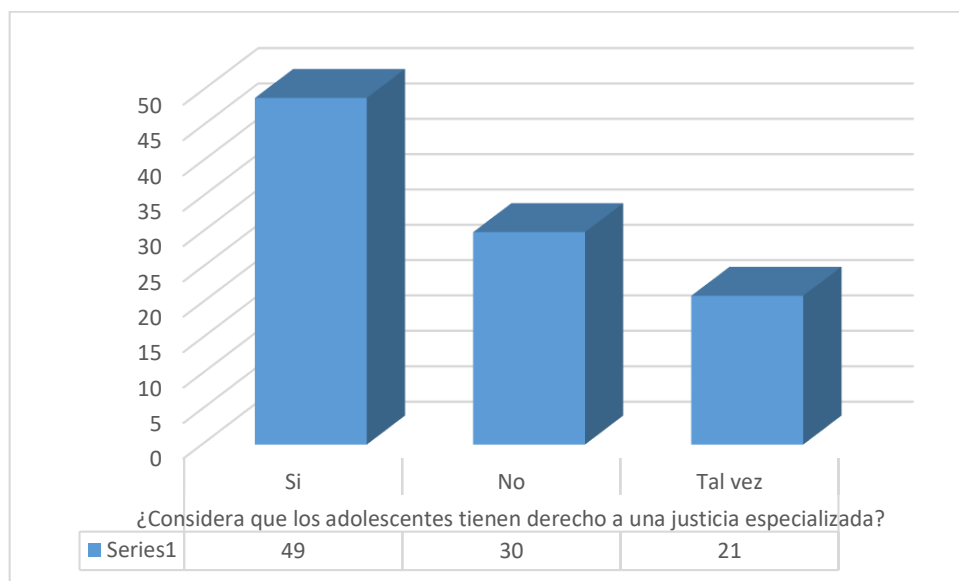
“La justicia penal adolescente es un sistema de administración de justicia que extiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. Su finalidad educativa y restauradora de la pena, lo que, en primer lugar, permite la reparación del daño causado en cualquier fase del procedimiento y consecuentemente el archivo de la causa y, en segundo, aconseja la menor restricción de derechos posible a la hora de imponer la sanción, siendo la privación de libertad el último recurso y sólo para infracciones muy graves”.



Descripción:

“Como pregunta medular se les consultó a nuestros informantes si conocían que era la Justicia Penal adolescente, a fin de poder realizarles preguntas al respecto y validar nuestra hipótesis. La mayoría de nuestros informantes indicaron que si conocían que era la Justicia Penal Adolescente, asimismo un número alto 33 señalaron la opción “no opina”, pues indicaron que tenían referencias pero no conocían a fondo de que se trataba. Solo 26 personas indicaron no saber”.

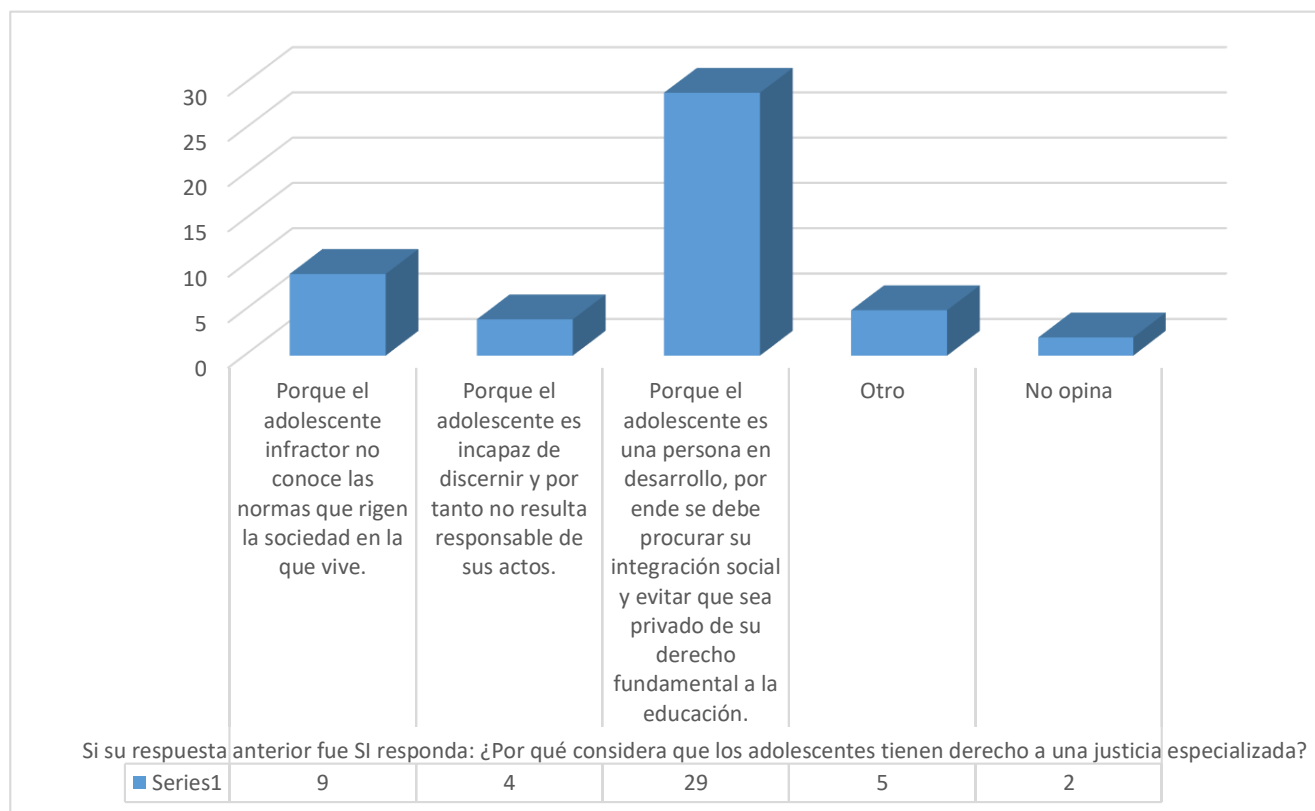
2.4. ¿Considera que los adolescentes tienen derecho a una justicia especializada?



Descripción:

“Se les consultó a los informantes si consideraban que los adolescentes tienen derecho a una justicia especializada o si deben ser juzgados como adultos. Las opiniones fueron muy divididas, no obstante la mayoría indica que si tienen derecho (en gran mayoría los informantes que responden al menor rango de edad), y 21 un tanto indecisos señalaron que tal vez tenían derecho a una justicia especializada”.

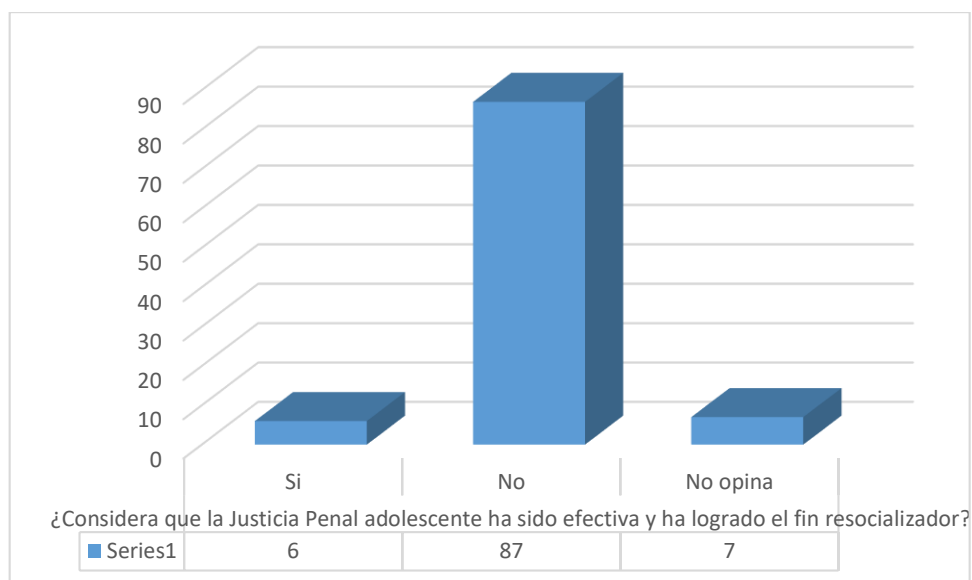
2.5. Si su respuesta anterior fue SI responda: ¿Por qué considera que los adolescentes tienen derecho a una justicia especializada?



Descripción:

“Que, a los 49 informantes que opinaron que los adolescentes si tienen derecho a una justicia especializada, se les consultó el porqué de su opinión. La mayoría indicó que la Justicia Penal adolescente es necesaria debido a que el adolescente es una persona en desarrollo, por ende se debe procurar su integración social y evitar que sea privado de su derecho fundamental a la educación. Son muy pocos los que consideran que el adolescente no conoce las normas de la sociedad en la que vive o que no es capaz de discernir; por el contrario consideran que si bien el adolescente es consciente de sus actos, es una persona que está en proceso de crecimiento y todavía puede amoldar sus conductas, las mismas que muchas veces son incorrectas debido al entorno tóxico en el que se desenvuelven ya sea en familia o socialmente; por lo cual es correcto darle una segunda oportunidad”.

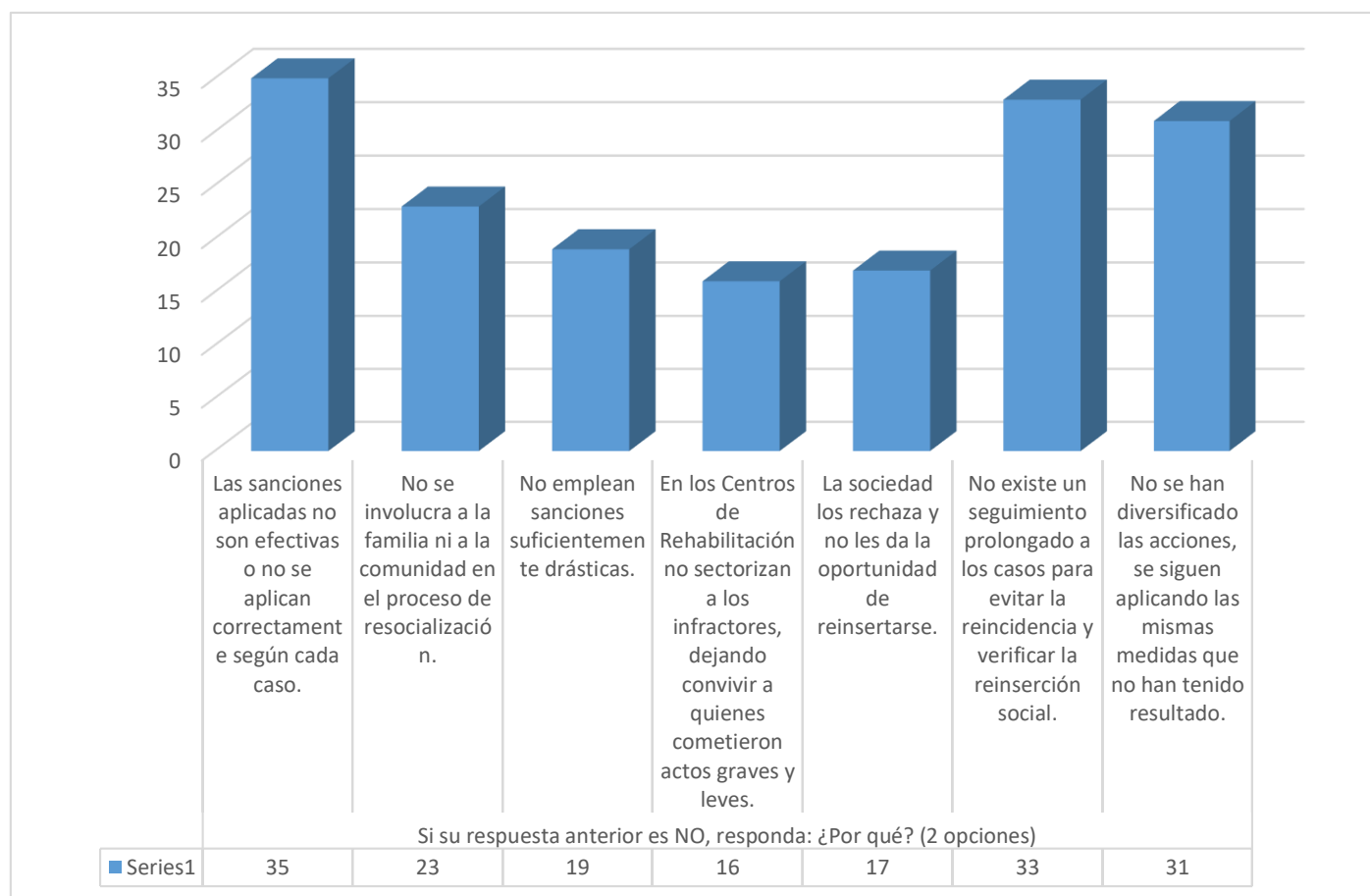
2.6. ¿Considera que la Justicia Penal adolescente ha sido efectiva y ha logrado el fin resocializador?



Descripción:

“Que, se consultó a los informantes si consideraban que la Justicia Penal adolescente había sido efectiva en el tiempo y había logrado su fin resocializador; a lo cual con mayoría contundente los informantes opinan que no se ha logrado el fin para el que fue creada, pues la misma realidad actual nos muestra el problema social de la delincuencia juvenil que cada día se acrecienta más, aprovechando su condición de menores de edad muchas veces son usados por delincuentes comunes. Asimismo el número de adolescentes reincidentes respalda la teoría que de la Justicia Penal adolescente no está siendo efectiva, ni cumpliendo el fin resocializador”.

2.7. Si su respuesta anterior es NO, responda: ¿Por qué? (2 opciones)



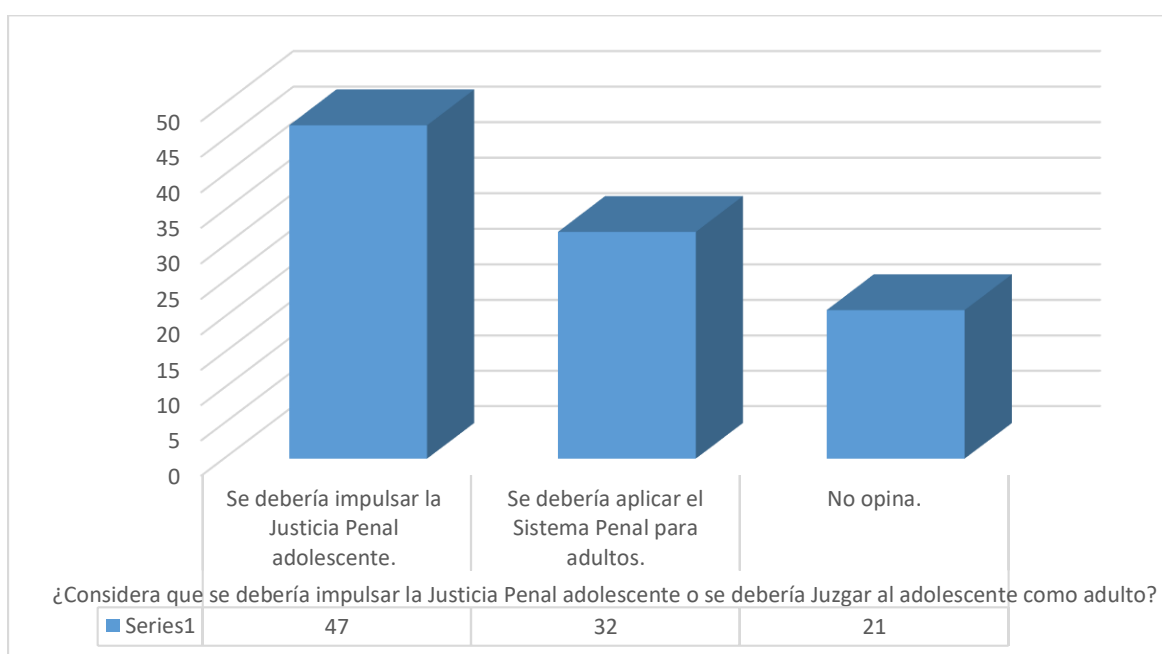
Descripción:

“Que, los informantes que en la pregunta previa respondieron que la Justicia Penal adolescente no era efectiva ni cumplía con su fin resocializador, que fueron un total de 87 personas, se les consultó el porqué de su opinión, dándoles opciones de elección múltiple (máximo 2 opciones).

Se obtuvo que la mayoría considera que las medidas socioeducativas no se han aplicado correctamente, ni se han aplicado las adecuadas para cada caso, lo cual les resta efectividad; asimismo con un número muy similar un grupo de informantes considera que no existe un seguimiento prolongado a los casos para evitar la reincidencia y verificar la reinserción social; pues en muchos casos el medio familiar o social es parte de la causa de su comportamiento, y al volver al mismo

lugar recaen en su actuar delictivo, no habiendo un seguimiento correcto para dichos adolescentes por parte del estado. Otras de las opciones con mayor respaldo es que no se involucra a la familia y la comunidad en la resocialización (generando un posterior rechazo) y que las medidas que se han tomado no han sido diversificadas e innovadoras, “se sigue haciendo más de lo mismo” y no da resultado”.

2.8. ¿Considera que se debería impulsar la Justicia Penal adolescente o se debería eliminar dicho sistema y Juzgar al adolescente como adulto?



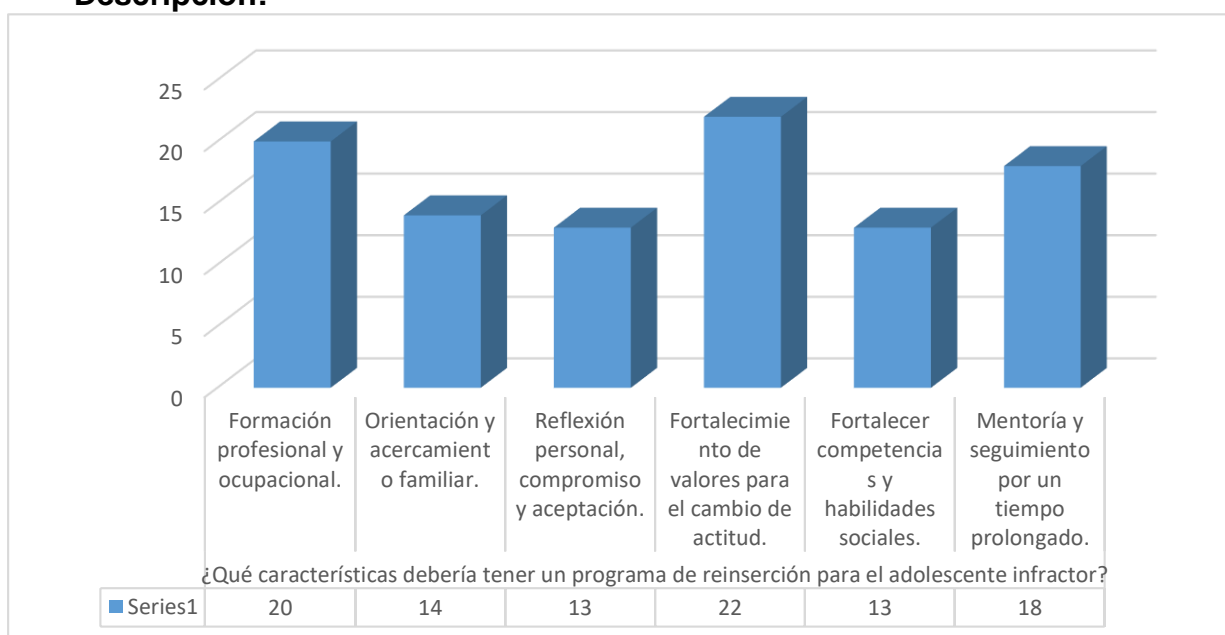
Descripción:

Con el fin de perfilar nuestra propuesta final, se preguntó a los informantes si creían que se debería promover el sistema de Justicia Penal adolescente o si era más adecuado eliminar dicho sistema y enjuiciar al adolescente como a un adulto. La mayoría de los encuestados, un total de 47 personas, expresaron su apoyo al

impulso del sistema de Justicia Penal adolescente. Sin embargo, también sugirieron la necesidad de desarrollar estrategias de fortalecimiento y establecer un plazo razonable para evaluar la efectividad del sistema. En caso de que la evaluación no logre cumplir con los objetivos establecidos, se plantearía la posibilidad de discontinuar dicho sistema.

2.9. ¿Qué características debería tener un programa de reinserción para el adolescente infractor?

Descripción:



se planteó a los informantes una pregunta final que buscaba conocer su opinión sobre las características que debería tener un programa de reinserción para el adolescente infractor. Esto se hizo con el propósito de determinar la propuesta final de la investigación. Las respuestas variaron ampliamente, aunque hubo algunas que se destacaron por su frecuencia. En particular, las siguientes fueron las más mencionadas:

Fortalecimiento de valores para cambiar actitudes: Los informantes señalaron que este aspecto es fundamental, ya que constituye la base para un verdadero cambio y reinserción del adolescente infractor.

Formación profesional y ocupacional: Se considera importante garantizar la capacitación del adolescente para su inserción en el mercado laboral, lo que facilitaría su reintegración a la sociedad.

Mentoría y seguimiento prolongado: Se propuso la necesidad de brindar un acompañamiento continuo al adolescente durante un período extendido, dado que el proceso de resocialización es largo y presenta diversas complicaciones que podrían llevar a una reincidencia en cualquier momento.

IV. PROPUESTA

PROYECTO ORIENTADO A REINTEGRAR AL ADOLESCENTE INFRACTOR A LA SOCIEDAD.

La propuesta actual forma parte del proyecto de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El tema de investigación se centra en “las medidas socioeducativas aplicadas al adolescente infractor, con el objetivo de abordar la creciente problemática causada por la normativa vigente y la falta de eficacia de las medidas existentes para la resocialización”. Esto ha llevado a una repetición constante de comportamientos delictivos por parte de los adolescentes a nivel nacional.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, observamos un aumento en la cantidad de delitos cometidos por adolescentes en nuestro país. Estos individuos no son juzgados de la misma manera que los adultos, lo cual ha sido aprovechado por aquellos más astutos para continuar delinquir. Esto se debe a la percepción de que las leyes en el Perú los protegen y que no serán alcanzados por la justicia de la misma manera que los adultos.

El tema del adolescente infractor es de suma importancia para la investigación, ya que las sanciones y medidas adoptadas para su rehabilitación y reeducación no han sido efectivas. Como resultado, las estadísticas muestran un incremento alarmante en estos delitos, lo que requiere que nuestras autoridades y la sociedad en su conjunto tomen medidas para detener, reducir y eventualmente eliminar estos actos delictivos. Esto se vuelve especialmente crucial cuando la justicia no se aplica de manera equitativa para todos los ciudadanos.

En este contexto, se presenta la siguiente propuesta como una alternativa para establecer directrices claras que puedan ser llevadas a cabo de manera conjunta, involucrando y comprometiendo al Estado a través de sus instituciones públicas, así como a los ciudadanos, quienes tienen un interés particular en vivir en una sociedad tranquila, pacífica y libre de temores, con el objetivo de dejar un legado óptimo para las generaciones futuras. Por lo tanto, es imperativo plantear un programa que permita la resocialización efectiva de los adolescentes que infringen la ley y causan perjuicios económicos, morales y espirituales a sus conciudadanos.

2. OBJETIVO:

La presente propuesta tiene como objetivo plantear un conjunto de actividades que, de manera sistemática, ordenada y clara, logren la resocialización del adolescente infractor. En este sentido, se busca establecer un programa acorde con nuestra realidad, que permita la reintegración social de estos adolescentes y evite que vuelvan a cometer actos delictivos. Además, se pretende trabajar en una planificación legal que permita reformar la normativa para ser más drástica con las actuaciones delictivas cometidas por los adolescentes, aplicando sanciones y reconociendo su responsabilidad penal en dichos actos.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Esta propuesta abarca tres etapas o fases, las cuales se describen a continuación:

- 3.1.** En relación con el desarrollo del programa, esto implica expandir nuestra comprensión más allá de simplemente pensar en una actividad que pueda involucrar al adolescente infractor, haciéndolo consciente y aceptando su responsabilidad penal, con el fin de que reconozca su culpa y se comprometa a no volver a delinquir. Es fundamental analizar el

contexto y comprender el origen de la mayoría de los adolescentes que cometen delitos. Una vez identificada la población vulnerable, se hace evidente que el trabajo requerido es mucho más amplio y va más allá de ofrecer charlas a las personas involucradas. Se debe trabajar de manera coordinada y considerar la complejidad de su situación problemática. Se propone centrar los esfuerzos en los colegios, ya que la formación inicial del individuo comienza en los primeros años de su vida. Por lo tanto, es crucial enfocarse en abordar temas de esta naturaleza desde una etapa temprana, lo cual no había sido prioridad anteriormente.

- 3.2.** Al trabajar con los adolescentes infractores, considerando que la primera fase representa una novedad y ha sido implementada recientemente, nos enfrentamos a casos de jóvenes cuya culpabilidad ya ha sido determinada y cuyas sanciones o medidas correctivas ya están establecidas. Por lo tanto, es crucial interactuar directamente con ellos mediante una serie renovada de actividades. Estas actividades deben ser innovadoras y específicas, diseñadas para obtener resultados a mediano y largo plazo. En este sentido, se propone involucrar a instituciones que sean parte de este proyecto, concentrando los esfuerzos en redirigir a los adolescentes hacia actividades que abarquen aspectos tanto intelectuales como físicos, manteniendo así sus mentes y cuerpos ocupados.
- 3.3.** Para finalizar, esta propuesta requiere evaluar el resultado o la repercusión de las actividades propuestas y cómo estas influyen o mejoran la mentalidad y el comportamiento de los adolescentes. Es importante considerar que la respuesta solo puede provenir de ellos y de la sociedad que observa, siente y experimenta la violencia en las calles.

Las universidades desempeñan un papel crucial en el desarrollo de esta propuesta, ya que a través de sus estudiantes se puede llevar a cabo el trabajo planteado en las tres fases propuestas. Ellos pueden actuar como impulsores para implementar la educación, la planificación, la programación e incluso la evaluación de si lo propuesto está generando un impacto positivo y realmente vale la pena ponerlo en práctica.

La presente propuesta desarrolla en su conjunto lo siguiente:

1. Análisis de la problemática actual del adolescente infractor. Es fundamental reconocer que diversos factores en el entorno, tales como la situación económica, social, moral, política y familiar, pueden influir en que muchas personas recurran a la comisión de actos delictivos. Esto es aún más relevante cuando los adolescentes reciben asesoramiento de delincuentes hábiles y experimentados, quienes, aprovechando el marco legal vigente, saben que los jóvenes no enfrentarán sanciones severas ni serán privados de su libertad como lo serían los adultos. Incluso, algunos de estos delincuentes, estén dentro o fuera del sistema penitenciario, continúan liderando sus organizaciones criminales.

Entender la realidad del entorno donde el adolescente infractor surgió, nació o se crió nos proporciona una visión de su vida y las razones por las cuales se vio tentado e incluso obligado a cometer actos contrarios a las normas sociales. Este primer acercamiento o esbozo nos brinda una visión integral del trabajo propuesto, permitiendo establecer limitaciones, generar nuevas ideas y evaluar las posibilidades con las que contamos para abordar esta dura realidad.

1.1. Establecimiento de los fundamentos iniciales de la medida socioeducativa para el adolescente infractor.

En relación a este aspecto, se busca recopilar información sobre la efectividad de las medidas socioeducativas implementadas hasta

ahora, es decir, qué se ha estado haciendo durante todos estos años y por qué estas medidas no han logrado generar un cambio significativo en estos individuos, orientándolos hacia una verdadera reforma. No se pretende cambiar la situación de la noche a la mañana, sino más bien incorporar un componente que integre los aspectos normativos sociales y morales de manera que orienten el comportamiento del adolescente, evitando la comisión de actos delictivos, y en caso de que estos ocurran, que las medidas propuestas permitan moldear su comportamiento y facilitar su reintegración a la sociedad.

Contar con esta información es crucial ya que servirá como punto de partida y contribuirá a la planificación que se pretende llevar a cabo. Es fundamental tener una comprensión clara y estructurada de lo que se va a desarrollar. No se trata simplemente de proponer una charla o un tema aislado, sino más bien de diseñar un conjunto de actividades que, en su conjunto, nos lleven a alcanzar los objetivos establecidos en la propuesta.

1.2. Evaluación de la eficacia de las medidas socioeducativas en vigor

Teniendo en cuenta cuáles son las medidas socioeducativas que se han implementado a lo largo de estos años, resulta conveniente analizarlas para determinar su efectividad. Esto se logra mediante el examen de las estadísticas disponibles y comparando el índice actual de criminalidad y los actos delictivos cometidos por adolescentes.

La efectividad de estas medidas se reflejará en las tasas de reincidencia de los infractores juveniles y en cualquier variación en el índice delictivo a lo largo del tiempo. Si se observa que una medida no está dando los resultados esperados, es necesario replantearla o descartarla. En este sentido, si una actividad no está contribuyendo al logro de los objetivos

planteados, debe ser eliminada y reemplazada por otra más efectiva que contribuya a reducir los índices de delincuencia juvenil.

1.3. Evaluación del comportamiento del adolescente infractor

Es necesario examinar el comportamiento del adolescente infractor, considerando que muchas veces las acciones delictivas no son iniciadas por ellos mismos, sino que son influenciados por su entorno. En muchos casos, especialmente cuando existen antecedentes familiares, se forma una red de apoyo que protege a los infractores juveniles, quienes saben que no enfrentarán las mismas consecuencias legales que los adultos. Esta falta de responsabilidad y privación de libertad los impulsa hacia la criminalidad. En los últimos años, hemos observado un aumento en los casos de robos y homicidios perpetrados por adolescentes.

Dentro de su entorno, el comportamiento delictivo es tolerado y hasta alentado, lo que impulsa a los adolescentes a continuar con sus acciones erróneas. Incluso llegan al extremo de promocionarse en redes sociales, mostrando el armamento que poseen y anunciando las tarifas que cobran por sus servicios delictivos. Esta actitud refleja una falta de respeto hacia la ley peruana y una indiferencia hacia la vida humana. Para ellos, quitarle la vida a alguien se percibe como un acto de prestigio y poder, elevándolos a la posición de líderes dentro de su grupo.

Ellos buscan reconocimiento y son incentivados por la admiración y el apoyo que reciben de su entorno, lo que los impulsa a seguir delinquir de manera continua. Además, el dinero obtenido de estas actividades les permite darse lujos, lo que los coloca en una posición donde pueden adquirir riquezas de forma rápida y sencilla. Su falta de valores y su escasa sensibilidad hacia el prójimo son evidentes, ya que

no valoran las emociones ni la vida misma, y son plenamente conscientes del riesgo al que se exponen.

2. Creación de programas de intervención social y educativa propuestos como opción para reducir los niveles de criminalidad.

En esta segunda perspectiva, es fundamental tener en cuenta el conocimiento adquirido sobre las medidas socioeducativas implementadas hasta la fecha y evaluar su relevancia en función de los resultados alcanzados hasta el momento. Se deben diseñar estrategias para llegar a toda la comunidad y promover su participación en este esfuerzo colectivo, reconociendo que los beneficios serán para el beneficio de todos. La sensación de seguridad se ha visto perturbada, ya que ahora nos preocupa constantemente lo que sucede en nuestras calles. Incluso actividades cotidianas como cenar en un restaurante ya no nos brindan la tranquilidad esperada, debido a la proliferación de robos a mano armada que han ganado notoriedad a nivel mundial. Los delincuentes muestran una creatividad cada vez mayor y recurren a una variedad de métodos para llevar a cabo sus actos delictivos.

Proponer una solución a este persistente problema social demanda colaboración en equipo, con el poder legislativo proporcionando el respaldo legal necesario. Creo que podría ser necesario realizar modificaciones legales para respaldar esta propuesta, especialmente porque nuestras sanciones por las infracciones cometidas por los adolescentes parecen ser poco severas y fomentan la reincidencia delictiva.

Actividades diseñadas para facilitar la implementación de medidas socioeducativas dirigidas a los adolescentes infractores.

Este componente tiene como objetivo establecer una lista de posibles actividades que podrían implementarse como medidas socioeducativas para reeducar a los adolescentes infractores. Estas actividades serán

ejecutadas y evaluadas durante su aplicación. Se pueden considerar una variedad de actividades en esta lista, las cuales serán posteriormente evaluadas para determinar su relevancia y considerarlas de forma permanente en el programa.

Análisis de la adecuación de las actividades socioeducativas sugeridas con el objetivo de reintegrar al adolescente infractor a la sociedad.

Una vez que se ha recopilado la lista de actividades propuestas para desarrollar enfoques socioeducativos, es necesario evaluar su relevancia. Esto implica considerar los objetivos que cada actividad podría lograr, aunque estamos trabajando con supuestos, ya que solo al implementarlas obtendremos resultados concretos. Sin embargo, este paso nos permite evaluar si las actividades propuestas son adecuadas y anticipar los beneficios que podrían derivarse de su ejecución.

Plan de acción educativa diseñado para la formación socioeducativa de los adolescentes infractores.

Actividades a desarrollar:

El gobierno, a través de las entidades responsables de la resocialización de los adolescentes infractores, compartirá el proyecto con las instituciones públicas para convocar a aquellos interesados en participar en el programa. Una vez que se exponga el propósito de esta iniciativa, se dará la bienvenida a la colaboración de instituciones tanto públicas como privadas, así como de la sociedad civil, en cualquier momento, para contribuir al éxito del programa.

Se convocará a todas las personas e instituciones interesadas en participar con el fin de elaborar el plan de trabajo destinado a reducir los índices de criminalidad entre los adolescentes infractores. En este momento, se elaborará una lista de actividades potenciales que podrían

llevarse a cabo, y luego se seleccionarán las actividades que se implementarán.

Además, es crucial que estas actividades estén diseñadas para generar impacto a mediano y largo plazo, lo que permitirá evaluar su efectividad y relevancia para mantener su continuidad. Dentro de las propuestas, se debe incluir la formación de valores en los centros educativos, con un enfoque especial en la educación emocional. También se deben considerar programas de apoyo para los adolescentes que estén cumpliendo medidas socioeducativas, así como la búsqueda de oportunidades de inserción laboral para ellos. Además, es importante implementar programas artísticos y culturales en los que puedan participar.

Se requiere establecer un programa de evaluación a mediano y largo plazo para analizar la eficacia del programa y además es fundamental contar con un cronograma definido que debe ser cumplido y supervisado por los encargados designados para liderar la iniciativa.

4. IMPLEMENTACIÓN:

Es imprescindible que esta propuesta se mantenga en curso de forma continua. No obstante, para evaluar adecuadamente sus resultados, se sugiere que su ejecución se extienda por lo menos durante un año. Durante este periodo, se introducirán los conceptos necesarios para compartir la idea con las instituciones y los involucrados que colaborarán directa e indirectamente.

Este proceso contribuirá a reducir la insensibilidad y la indiferencia de algunos ciudadanos, siendo un llamado a la reflexión y a la toma de conciencia sobre nuestra capacidad para colaborar en estos casos, en lugar de quedarnos al margen y esperar que las autoridades se encarguen de todo.

Será esencial contar con una lista de las instituciones colaboradoras, tanto en el ámbito educativo como laboral, ya que necesitaremos todo el apoyo posible. Esto implica concretar colaboraciones que permitan la realización de prácticas, contribuciones sociales, responsabilidad social e incluso oportunidades laborales.

5. PARTICIPANTES:

Aquí se detallan todos los participantes involucrados en la planificación, implementación y evaluación final de la propuesta. De esta manera, contaremos con el respaldo de las instituciones educativas de nivel básico regular y de las autoridades interesadas en ejecutar el proyecto. Asimismo, contaremos con el apoyo de las instituciones universitarias, que proporcionarán su apoyo logístico y permitirán que sus estudiantes realicen prácticas.

No debemos pasar por alto a los responsables de las instituciones que deseen sumarse al tema de las capacitaciones, así como a los programas que permitan mantener a los adolescentes responsables de actos delictivos ocupados en actividades que requieran esfuerzo físico o mental. Estos programas deben tener como objetivo cambiar el rumbo de estos jóvenes, quienes por diversas razones se involucraron en actividades delictivas.

6. ELEMENTOS

Los elementos propuestos tienen la capacidad de estar interconectados y funcionar como partes de un todo integrado que activará esta iniciativa. No se debe considerar que uno tenga mayor importancia o necesidad que otro, ya que todos son imprescindibles para el éxito de la propuesta. El propósito de los componentes del Modelo es intervenir de manera dinámica, aportando a través de la educación conceptos, actividades y estrategias reflexivas. En el ámbito educativo, se pueden lograr resultados significativos, entendiendo que la

educación tiene el poder de transformar, romper paradigmas y alcanzar una variedad de objetivos al enfocar adecuadamente el plan de trabajo deseado.

La colaboración entre la ciudadanía, la policía, el poder legislativo y otras instituciones que se unan al programa será fundamental para alcanzar el éxito del mismo. En este sentido, esta propuesta contemplará los siguientes elementos:

El liderazgo sinérgico se destaca como un aspecto fundamental en nuestras responsabilidades diarias. Si bien el liderazgo puede surgir de manera natural en algunos casos, en otros se desarrolla a lo largo de la vida. Es importante reconocer que el liderazgo se puede aprender; por lo tanto, todos tenemos el potencial para convertirnos en líderes excepcionales. En este contexto, el liderazgo no implica tener un dominio absoluto sobre todas las áreas, sino más bien destacarse en un campo específico o aspecto particular. Por lo tanto, la integración de todos estos componentes es crucial para lograr un liderazgo sinérgico, que permita aprovechar las habilidades y fortalezas individuales de cada persona que desee participar y contribuir al programa.

La colaboración en el trabajo implica el compromiso de todas las instituciones y responsables del proyecto para trabajar de manera coordinada y consensuada. Esto implica establecer políticas y estrategias que guíen la ejecución y el éxito del programa. Es necesario fortalecer las medidas socioeducativas para garantizar que cumplan su propósito y se consideren una necesidad importante para cumplir con lo establecido por la normativa vigente. Las estrategias utilizadas deben ser efectivas y las medidas socioeducativas deben adaptarse a las necesidades actuales, por lo que es fundamental evaluarlas continuamente para determinar su eficacia a lo largo del tiempo.

El compromiso social es un aspecto fundamental que debe ser cultivado desde la educación primaria. A lo largo de nuestra formación educativa, observamos que el enfoque se centra principalmente en la transmisión de conocimientos, dejando de lado la formación en aspectos sociales. En el pasado, era más común ver manifestaciones y protestas, con estudiantes reclamando por sus

derechos y ciudadanos saliendo a las calles para exigir el respeto de sus derechos.

Es crucial que el compromiso social se promueva desde temprana edad. Los individuos deben comprometerse con su sociedad y luchar por una comunidad más justa y digna. Esto promueve el ejercicio de buenas prácticas y la preservación o promoción de valores fundamentales. Todos debemos estar interesados en las problemáticas sociales y no simplemente ignorarlas por sentirnos ajenos a ellas. Por el contrario, debemos trabajar juntos para abordar estas cuestiones, como lo hicieron nuestros antepasados en las luchas por los derechos que hoy reconocemos. Del mismo modo, es necesario que trabajemos a este nivel, analizando, reflexionando, opinando, proponiendo y mejorando las propuestas que se plantean.

La planeación estratégica es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, ya que proporciona una guía detallada que describe los conceptos a utilizar, los lineamientos y toda la información necesaria para su ejecución exitosa. En este contexto, la planeación estratégica se define como un proceso integrado para la mejora continua de las nuevas medidas adoptadas, centrándose en una nueva cultura educativa que incluya la autoevaluación y se base en el desarrollo de competencias. Este enfoque implica desarrollar habilidades y reformar o reeducar a aquellos individuos que han tomado decisiones equivocadas.

En este sentido, la promoción de labores conjuntas y consensuadas es esencial para lograr los objetivos deseados a mediano plazo. Esta actividad se llevará a cabo de manera activa, participativa e innovadora, involucrando y comprometiendo a todos los actores descritos en la presente propuesta.

V. CONCLUSIONES

1. La Justicia Penal Adolescente carece de una variedad de enfoques para lograr su principal objetivo de resocialización.
2. Toda institución dedicada a los jóvenes debe comprenderlos primero y luego implementar estrategias acordes con su naturaleza. Sin embargo, el sistema actual no comprende a los jóvenes peruanos y continúa utilizando métodos obsoletos que no han tenido impacto. A pesar de las investigaciones realizadas para identificar perfiles y grupos vulnerables de potenciales infractores, estas investigaciones solo han generado datos y publicaciones, sin implementarse medidas preventivas para evitar el aumento de la delincuencia juvenil y la incorporación de nuevos jóvenes en este mundo.
3. Las medidas socioeducativas aplicadas a los jóvenes son aplicadas de manera generalizada, sin un estudio previo sobre su utilidad para cada caso específico. Cada caso y cada adolescente son únicos, y su tratamiento y reintegración deberían ser evaluados individualmente. El fracaso de muchas medidas aplicadas se debe a que no eran adecuadas para la rehabilitación de cada adolescente.
4. La sociedad no ha sido incluida en el proceso de reintegración, lo que hace que los jóvenes sean rechazados al regresar a sus comunidades. La falta de familiaridad y participación de la comunidad en su rehabilitación genera rechazo e incluso temor hacia los jóvenes infractores.
5. A nivel estructural, hay deficiencias en cuanto a personal, infraestructura y profesionales especializados para atender cada caso, lo cual es responsabilidad del Estado.

6. La reinserción es un proceso prolongado que requiere seguimiento y apoyo continuo, más allá del cumplimiento de la medida impuesta. Es esencial proporcionar seguimiento y apoyo a largo plazo, especialmente considerando que muchos adolescentes infractores provienen de entornos desfavorables y sin apoyo familiar adecuado.
7. Es crucial establecer una Justicia Especializada para los jóvenes, que garantice sus derechos a la reinserción y al desarrollo, teniendo en cuenta su condición como seres humanos en desarrollo y su capacidad de cambiar su comportamiento.
8. La Justicia Penal Adolescente necesita diversificar sus estrategias y someterse a evaluaciones continuas para determinar su efectividad y progreso. Esto permitirá determinar si realmente está funcionando o si es necesario realizar ajustes en su enfoque y prácticas.

VI.RECOMENDACIONES

1. Se sugiere la implementación de las estrategias delineadas en el "Programa para la Resocialización del Adolescente Infractor", desarrollado durante esta investigación, como la recomendación principal.
2. Sería apropiado establecer un programa de voluntariado para reclutar a estudiantes y profesionales talentosos interesados en contribuir al plan de acción. Se puede involucrar a todas las disciplinas profesionales, lo que permitirá diversificar las estrategias y hacerlas multidisciplinarias, además de fomentar la participación activa de la sociedad.
3. Es imprescindible establecer un calendario de evaluación que registre el progreso y el impacto del modelo implementado. Se sugiere realizar la primera evaluación dentro de un período de 5 o 6 años para comprender su efectividad real.
4. Se recomienda difundir el modelo propuesto mediante estrategias innovadoras de publicidad en redes sociales y medios audiovisuales para que toda la población pueda conocerlo y participar. Esto también ayudará a garantizar su correcta implementación al permitir que la sociedad actúe como fiscalizador del proceso.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Arias López Juan Carlos (2007). Apuntes sobre el nuevo sistema penal para adolescentes. Colombia: Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
- Agudelo Betancur, N. (2007a). Los “inimputables” frente a las causales de justificación e inculpabilidad. Pág. 27, Bogotá: Editorial Temis.
- Altschuler, D. & Brash, R. (2004). Adolescent and teenage offenders confronting the challenges and opportunities of reentry. Youth Violence and Juvenile Justice, 2(1), 72-87.
- BERISTAIN, Antonio (2008). Transformación del Derecho Penal y la Criminología hacia la Victimología. Lima: ARA Editores E.I.R.L p.57
- BARLETTA, María. Curso Derechos de la Niñez y Adolescencia. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2011
- CASTILLO ALVA, José Luis, “El Delito de Aborto” .Lima: Ara Editores 2009, 98p.
- CASTILLO FREYRE, Mario. Código civil. Lima. Asesoramiento y Análisis Laborales S.A. 2004. 516 p. BRENES QUESADA, Carlos. Tesis Justicia Restaurativa “Una Herramienta para la Solución al fenómeno de la Criminalidad Costarricense” San Jose de Costa Rica. Julio de 2009.
- Claus ROXIN: “Culpabilidad y exclusion de la culpabilidad en el derecho penal” Editorial Civitas - Thompson. España. 2006. Pág. 451.
- Carranza E., Maxera R., El control social sobre niños, niñas y adolescentes en América Latina, En: Ministerio de Justicia de El Salvador y otros, La niñez y la

adolescencia en conflicto con la ley penal, Editorial Hombres de Maíz, San Salvador, 1995, p. 63-82.

- CILLERO, Miguel, “Adolescentes y sistema penal. Propositiones desde la Convención sobre los Derechos del Niño”, pp. 101-138 Revista Justicia y Derechos del Niño N° 2 (2000).
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 2 de septiembre de 2004, p. 115.
- DÜNKEL, Frieder; VAN ZYL SMIT, Dirk, “Implementación del encarcelamiento juvenil y derecho constitucional en Alemania”, en: SERRANO MAÍLLO, Alfonso; GUZMÁN DÁLBORA, José Luis (Eds.), Procesos de infracción de normas y de reacción a la infracción de normas: dos tradiciones criminológicas. Nuevos estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez, Madrid: Dykinson, 2008, p. 214. La sentencia es del 31 de mayo de 2006, BVerfG (2006) 2 BvR 1673/04-2 BvR 2402/04.
- Decreto Legislativo Que Aprueba El Código De Responsabilidad Penal De Adolescentes. Art. I. (2017)
- Figueroa Navarro, C., y Martínez Galindo, G., Imputabilidad, en García Valdés, C.; (Dir.): Diccionario de Ciencias Penales. Pág. 299 Edisofer, Madrid, 2000.
- Gaitán-Mahecha B. La imputabilidad. Pág. 47, Nuevo Foro Penal. 1982.

- GARCÍA DEL RIO, Flavio; “Manual de Derecho Penal”, Lima: Editorial Ediciones Legales Iberoamericana, 2004
- Giménez-Salinas: “Evolución del tratamiento penal de la infancia delincuente y su panorama en la Europa actual. Ministerio de Justicia de El Salvador y otros. “La niñez y la adolescencia en conflicto con la ley penal” Editorial Hombres de Maíz, San Salvador, 1995, p. 25 y ss.
- JIMÉNEZ, Nydia. Causas de Criminalidad en los menores, pp. 49 – 123. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1978.
- Justicia y Derecho del niño, Número Dos. Buenos Aires. Pág. 77-91
https://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos2.pdf.
- Mary Beloff “Algunas confusiones en torno a las consecuencias jurídicas de la conducta transgresora de la ley penal en los nuevos sistemas de justicia juvenil latinoamericanos* citado por GARCÍA MENDEZ , Emilio en “Adolescentes y Responsabilidad Ad Hoc” Buenos Aires. 2001
- Mendizábal Osés, L., Derecho de Menores. Teoría General. Pirámide, Pág. 31-32; Madrid, 1977.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor, “Política Criminal Peruana”, Lima, Perú. Cultural Cuzco S.A., Editores, 1985, p. 45.
- SEDA, Edson “*Comentario al proceso de reforma legislativa en Brasil*” citado por GARCÍA MENDEZ, Emilio y BELOFF, *op. cit.*, págs. 239 y siguientes del Tomo 1 de la Segunda Edición. 1999.

- Upperton, R. & Thompson, A. (2007). Predicting juvenile offender recidivism: Risk- Need assessment and juvenile justice officers. *Psychiatry, Psychology and Law*, 14(1), 138-146.
- Velásquez Velásquez, F. Derecho penal parte general. Pág. 509 Bogotá: Editorial Temis. (2004).
- VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., Delincuencia juvenil. Pág. 222 y 223, citado en ¹ CÁMARA ARROYO, S. "Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artículo 19 CP y tipologías de delincuentes juveniles conforme a su responsabilidad criminal". Pág. 258.
- Weatherburn, D. & Bartels, L. (2008). The recidivism of offenders given suspended sentences in New South Wales, Australia. *The British Journal of Criminology*, 48(5), 667-683.
- Welsh, J; Schmidt, F; Mckinnon, L; Meyers, C; Meyers, J. (2008) A Comparative Study of Adolescent Risk Assessment Instruments: Predictive and Incremental Validity.104-115. William, D. B. & Piquero, A.R., (2012). Assessing the impact of imprisonment on recidivism.

ANEXOS

ANEXO N° 01: Cuestionario

DIRIGIDO AL PÚBLICO EN GENERAL DEL DISTRITO DE CHICLAYO

I. GENERALIDADES: INFORMANTES

En la presente encuesta participaron 100 informantes de la ciudad de Chiclayo, quienes fueron seleccionados vía la técnica de muestreo por conveniencia

1.1. EDAD

a) 15 a 25 () b) 26 a 35 () c) a 35 a 49 () d) 50 a más ()

1.2. SEXO

a) Masculino () b) Femenino ()

1.3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN

- a) Sin estudios ()
- b) Primaria ()
- c) Secundaria ()
- d) Superior no universitaria ()
- e) Superior universitaria ()
- f) Otro ()

III. RESPONSABLES: COMUNIDAD JURÍDICA

2.1. ¿Alguna vez ha sido víctima de un hecho delictivo cometido por un adolescente?

- a) Si ()
- b) No ()
- c) No opina ()

2.2. ¿Conoce cuál fue la medida impuesta por la comisión del hecho?

- a) Si ()
- b) No ()
- c) No opina ()

2.3. ¿Conoce Usted qué es la Justicia Penal adolescente?

- a) Si
- b) No
- c) No opina

La justicia penal adolescente es un sistema de administración de justicia que extiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. Su finalidad educativa y restauradora de la pena, lo que, en primer lugar, permite la reparación del daño causado en cualquier fase del procedimiento y consecuentemente el archivo de la causa y, en segundo, aconseja la menor restricción de derechos posible a la hora de imponer la sanción, siendo la privación de libertad el último recurso y sólo para infracciones muy graves.

2.4. ¿Considera que los adolescentes tienen derecho a una justicia especializada?

- a) Si
- b) No
- c) Tal vez

2.5. Si su respuesta anterior fue SI responda: ¿Por qué considera que los adolescentes tienen derecho a una justicia especializada?

- a) Porque el adolescente infractor no conoce las normas que rigen la sociedad en la que vive.
- b) Porque el adolescente es incapaz de discernir y por tanto no resulta responsable de sus actos.
- c) Porque el adolescente es una persona en desarrollo, por ende se debe procurar su integración social y evitar que sea privado de su derecho fundamental a la educación.
- d) Otro
- e) No opina

2.6. ¿Considera que la Justicia Penal adolescente ha sido efectiva y ha logrado el fin resocializador?

- a) Si
- b) No
- c) No opina

2.7. Si su respuesta anterior es NO, responda: ¿Por qué? (máximo 2 opciones)

- a) Las sanciones aplicadas no son efectivas o no se aplican correctamente según cada caso.

- b) No se involucra a la familia ni a la comunidad en el proceso de resocialización.
- c) No emplean sanciones suficientemente drásticas
- d) En los Centros de Rehabilitación no sectorizan a los infractores, dejando convivir a quienes cometieron actos graves y leves.
- e) La sociedad los rechaza y no les da la oportunidad de reinserirse.
- f) No existe un seguimiento prolongado a los casos para evitar la reincidencia y verificar la reinserción social.
- g) No se han diversificado las acciones, se siguen aplicando las mismas medidas que no han tenido resultado.

2.8. ¿Qué características debería tener un programa de reinserción para el adolescente infractor?

- a) Formación profesional y ocupacional.
- b) Orientación y acercamiento familiar.
- c) Reflexión personal, compromiso y aceptación.
- d) Fortalecimiento de valores para el cambio de actitud.
- e) Fortalecer competencias y habilidades sociales.
- f) Mentoría y seguimiento por un tiempo prolongado.

2.9. ¿Considera que se debería impulsar la Justicia Penal adolescente o se debería Juzgar al adolescente como adulto?

- a) Se debería impulsar la Justicia Penal adolescente. (Estableciendo un plazo de evaluación para determinar su pertinencia)
- b) Se debería aplicar el Sistema Penal para adultos.
- c) No opina.

¡Agradecemos su colaboración

ANEXO N° 02: Jurisprudencia.

La jurisprudencia fue extraída de “Compilación de Jurisprudencia en Justicia Penal Juvenil” de fecha 2013.

1. INFRACCIÓN: HURTO AGRAVADO COMPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA EN JUSTICIA PENAL JUVENIL

Tema apreciable:

Determinación de medida socioeducativa en consideración a informes psicológicos y sociales, así como la manifestación del menor. “... por ello aplicar una medida socio educativa con la finalidad de que enmiende su comportamiento y conducta antisocial y una reparación civil acorde al daño causado, sin embargo no se ordenará la devolución de bienes por cuanto estos ya se entregaron al agraviado y no fueron puestos a disposición del Juzgado...”.

ANÁLISIS DE LA DECISIÓN JURISDICCIONAL

- **Tema Apreciable:** • **Tipo de Infracción a la Ley Penal: Contra el Patrimonio Hurto Agravado.**
- **Medida Socioeducativa Determinada:** Prestación de Servicios a la Comunidad.
- **Base Legal:** Código Penal Peruano.
- **Base Procedimental:** Código de Niño y Adolescente y aplicación supletoria del Código Procesal Penal.
- **Descripción del caso:** Que, en Mayo del dos mil, el agraviado se enteró de que había sufrido un hurto en su establecimiento de locutorio e Internet y al verificarlo, se percató de que le faltaba VOIP, un Reuter, una base de celular incluido un chip de claro y un chip de movistar empresarial, dos CPU Pentium cuatro, dos memorias de 512 MB, dinero en efectivo ascendiente a la suma de mil quinientos nuevos soles para los pagos de servicios de arrendamiento, pago de la empleada, recarga de VOIP, pagos de servicios de arrendamiento, pagos de los chips y

ganancias de la semana del negocio de Internet. Al acercarse a la comisaría, se dio con la sorpresa de que las personas que habían hurtado sus bienes se encontraban en la comisaría.

- **Hecho típico:** Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del tipo penal signado en el artículo 185 (HURTO), el inciso 6 del primer párrafo (Concurso de dos o más personas) del artículo 186 (Hurto Agravado), del Código Penal vigente.

- **Valoración para la decisión:** Se tiene que encuentra acreditada la responsabilidad penal del menor; hechos que han sido demostrados con sus respectivas declaraciones a nivel policial, así como la que se llevó a cabo en la Audiencia de esclarecimiento de los hechos; se tiene el informe psicológico que concluye: “Soporte familiar inadecuado, Trastorno de comportamiento social en la adolescencia”, mientras que el informe socio económico refiere: “... el adolescente manifestó que las relaciones con sus padres son buenas, actualmente están resentidos con él, pero les ha prometido que se va a portar bien porque reconoce que ha cometido un error al salir con su amigo y ser cómplice de ese robo. Manifestó además que quiere demostrar que va a cambiar y que lo único que desea es terminar la secundaria y prepararse para ingresar a la universidad”. Estos informes se tendrán en cuenta al momento de aplicar la medida socioeducativa respectiva.

- **Decisión:** Se le impone la medida socio-educativa de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD de SEIS MESES** que se cumplirá a cargo de la Municipalidad Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz, actuando como responsable el Alcalde quien vigilará el cumplimiento de la orden, comunicando al Juzgado.

RESOLUCIÓN

Huaraz, 2009

VISTOS: “I.- PARTE EXPOSITIVA: ...

2) PRETENSIÓN PUNITIVA: 2.1.- Hechos Imputados: a) Al menor procesado se les imputa que el día ... de Mayo del dos mil nueve, el agraviado se había enterado que había sufrido un hurto en su establecimiento de locutorio e Internet y al verificar se percató de que le faltaba VOIP, un Reuter, una base de celular incluido un chip de claro y un chip de movistar empresarial, dos CPU Pentium cuatro, dos memorias de 512 MB, dinero en efectivo que le dejó a la empleada en la suma de mil quinientos nuevos soles para los pagos de servicios de arrendamiento, pago de la empleada, recarga de VOIP, pagos de los chips, ganancias de la semana del negocio de locutorio e Internet, que había dado una cantidad de quinientos cincuenta nuevos soles. Al apersonarse a la comisaría, se dio con la sorpresa de que las personas que habían hurtado sus bienes se encontraban en la comisaría.

II. PARTE CONSIDERATIVA: Fundamentos jurídicos de la sentencia: Primero: Derecho de defensa del menor procesado: La Constitución establece en su artículo 139 inciso 14, el derecho de toda persona de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso, garantizándosele el derecho a comunicarse con su abogado y a ser asesorado por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad; ello como expresión del derecho fundamental del debido proceso, situación que merece tratamiento especial en el caso de un menor de edad, dada que en esta materia, cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio de interés superior del niño que ha sido recogido por el artículo 4 de la Norma Constitucional y el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, así como los instrumentos internacionales, como el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas en materia de Derechos Humanos, que regulan en concreto la dignidad de la persona humana; derechos que se han protegido durante toda la secuela del proceso no habiéndose recortado el derecho de defensa del menor procesado ni vulnerado el debido proceso.

Segundo: Norma sustantiva aplicable al caso: Según lo previsto en el inciso primero del artículo 186 del Código Penal, modificado por Ley N° 28848, comete hurto agravado la persona “que para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra 2) durante la noche y 6) Mediante el concurso de dos o más personas...”

Tercero: Doctrina en delitos contra el Patrimonio: Que, en el delito de hurto es esencialmente dolosa, pues, la conducta del agente este precedida de dolo, conciencia y voluntad de la realización típica desde este punto de vista: “importa que el auto conduzca su comportamiento mediante un acto de apoderamiento, que habiendo desplazamiento, pues, el bien es susceptible de aprehensión, pueda tener de él una nueva esfera de custodia, que le permita actos de disponibilidad sobre el mismo”. En cuanto a la agravante que el hurto se desarrolle en casa habitada, lo cual significa que el recinto debe mantener vigente una residencia, por parte de una o más personas, que no necesariamente deban estar presentes al momento que se realiza la omisión del acto ilícito, siendo el plus del peligro que corren los moradores del inmueble, lo cual hace que el hurto se califique como agravado.

Cuarto: Edad del menor procesado: Con la copia fedateada de la boleta de inscripción militar de fojas quince, se aprecia que el menor a la fecha de la comisión de los hechos ocurridos entre el siete y ocho de Mayo del dos mil nueve, contaba con diecisiete años con diez meses de edad aproximadamente.

Quinto: Existencia del daño causado, gravedad de los hechos y responsabilidad penal: Que, en autos se encuentra acreditada la responsabilidad penal del menor en cuanto al acto antisocial considerado coma DELITO CONTRA EL PATRIMONIO-HURTO AGRAVADO en agravio de FFF; hechos que han sido demostrados con sus respectivas declaraciones a nivel policial, infractor de fojas veinticinco a veintiocho, la que se llevó a cabo en la Audiencia de esclarecimiento de los hechos de fojas cincuenta y siete a cincuenta y nueve donde se actuó la diligencia de Inspección judicial; debiendo por ello aplicar una medida socio educativa con la finalidad de que enmiende su comportamiento y conducta antisocial y una reparación civil acorde al

daño causado, sin embargo no se ordenará la devolución de bienes por cuanto estos ya se entregaron al agraviado y no fueron puestos a disposición del Juzgado.-

Sexto: Informe del Equipo Multidisciplinario: Que, en autos obra el informe psicológico de fojas treinta y uno a treinta y dos en el que se concluye: “Soporte familiar inadecuado, Trastorno de comportamiento social en la adolescencia”, mientras que el informe socio económico de fojas treinta y tres a treinta y cinco, refiere: “... el adolescente manifestó que las relaciones con sus padres son buenas, actualmente están resentidos con él, pero les ha prometido que se va a portar bien porque reconoce que ha cometido un error al salir con su amigo y ser cómplice de ese robo sin querer. Manifestó además que quiere demostrar que va a cambiar y que lo único que desea es terminar la secundaria y prepararse para ingresar a la universidad” Estos informes se tendrán en cuenta al momento de aplicar la medida socioeducativa respectiva.-

III.- PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos esgrimidos de conformidad a lo previsto en los incisos uno y seis del artículo 186 del Código penal modificado por Ley 28848, artículos doscientos quince, doscientos dieciséis, inciso b) del artículo doscientos diecisiete y doscientos treinta y cinco del Código de los Niños y Adolescentes – Ley veintisiete mil trescientos treinta y siete, con el criterio de conciencia que la ley faculta, Administrando Justicia a Nombre de la Nación;

FALLO: IMPONIENDO al adolescente, por infracción de acto antisocial considerado como **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO-HURTO AGRAVADO** en agravio del agraviado, se ordena la medida socio-educativa de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD de SEIS MESES** que se cumplirá a cargo de la Municipalidad Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz, oficiándose mediante el Alcalde quien supervigilará su cumplimiento, comunicando al Juzgado; bajo apercibimiento de convertirse la pena en la de INTERNACIÓN en un Centro Juvenil de la ciudad de Lima ordenándose su captura correspondiente...”.

2. INFRACCIÓN: TENENCIA ILEGAL DE ARMAS

La Medida Socio educativa determinada atendiendo a la materialidad de la acción del adolescente infractor.

Tema Apreciable

“... para la medida a imponerse se tiene en cuenta las condiciones personales del infractor, que en este caso, proviene de una familia desorganizada desde niño, que no registra anotación judicial alguna, por lo que en aplicación de los principios de proporcionalidad y lesividad previstos en los artículos VIII y IX del Título Preliminar del Código Penal de aplicación supletoria, corresponde ser sancionado con la medida Socioeducativa de Libertad Restringida”.

- **Tipo de Infracción a la Ley Penal:** Tenencia Ilegal de Armas
- **Medida Socioeducativa Determinada:** Libertad Restringida
- **Base Legal:** Código Penal Peruano
- **Base Procedimental:** Código del Niño y el Adolescente y aplicación supletoria del Código Procesal Penal.
- **Descripción del caso:** Se le imputa al adolescente que al encontrarse con su amigo, comenzó a hacer disparos al aire, de cuyo hecho la Policía fue alertada por vecinos del lugar, procediendo a detener al adolescente, encontrando en su poder dieciséis cartuchos, señalando el adolescente investigado que lo intervinieron cuando se encontraba en el patio de la casa de su amiga.
- **Hecho típico:** Que, la infracción se encuentra comprendida dentro del tipo penal signado en el artículo 279 (Tenencia Ilegal de Armas), del Código Penal vigente.
- **Valoración para la decisión:** Se tiene en cuenta para la medida a imponerse, las condiciones personales del infractor, que en este caso, proviene de una familia desorganizada desde niño, que no registra anotación judicial alguna; por lo que en aplicación de los principios de proporcionalidad y lesividad previstos en los artículos VIII y IX del Título Preliminar del Código Penal de aplicación supletoria, corresponde ser sancionado con la medida Socioeducativa de Libertad Restringida, a fin de que el citado infractor se reeduce y rehabilite y de esa forma se reintegre a la sociedad como ciudadano útil; se tiene en cuenta el Informe Social que señala

que el adolescente fue abandonado por sus padres desde niño conjuntamente con sus cinco hermanos menores, quien vive en Arequipa con su actual pareja, siendo el último el menor investigado y que en la actualidad vive con la hermana.

- **Decisión:** Se le Impone la Medida Socioeducativa de LIBERTAD RESTRINGIDA de Ocho Meses la misma que se hace efectiva en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo de esta ciudad, a partir de la fecha que empieza el programa respectivo.

Resolución N°

Trujillo, 2012

“SEGUNDO. Que, conforme al acta de intervención policial de fojas siete y acta de hallazgos y recojo, señala la Policía Nacional que al ser alertados por los vecinos del lugar de los hechos, se constituyeron al lugar, señalando los vecinos que no quisieron identificarse por temor a represalias, que dos sujetos varones y una mujer realizaron disparos con arma de fuego (pistolas) sindicado al CHATO, TIGRE y una mujer de nombre CARMEN, estatura mediana cabello pintado y contextura gruesa, indicándose que luego de los disparos, el sujeto “Tigre” se dirigió hacia el cerro Mirador y el “Chato” y “Carmen” se retiraron con dirección por la calle Micaela Bastidas encontrándose en el lugar 02 casquillos percutados marca FAME; practicados los desplazamientos por diferentes lugares, la policía ubica al investigado dentro del inmueble sin número ingresando por una reja, una tienda de venta de ropa, quien al notar la presencia de la policía raudamente se ocultó en su interior siendo capturado en circunstancias que ofrecía tenaz resistencia a su conducción. Autolesionándose en la reja en diferentes partes del cuerpo. Inclusive se lanzó contra el pavimento con la finalidad de impedir su traslado a la comisaría siendo reducido con los grilletes de seguridad encontrándole los 16 cartuchos en uno de los bolsillos del pantalón Jean de cuya cantidad solo admite tres o cuatro y no más;

TERCERO, Que frente a los cargos incriminados al citado adolescente, este señala en su referencia personal de fojas doce a trece a nivel preliminar. Porque a nivel judicial

no concurrió a la diligencia de esclarecimiento de hechos pese a las reiteradas citaciones que aparecen de autos, que la policía lo intervino cuando se encontraba dentro de la casa, en la parte del patio de dicha vivienda de su amiga y como estaba embriagado no se dio cuenta que fue golpeado y tirado al suelo por la policía, quienes enseguida lo trasladaron con los ojos vendados con cintas de color negro a la Comisaría de Sánchez Carrión del distrito El Porvenir, sosteniendo enfáticamente que solo tenía tres o cuatro cartuchos, y no dieciséis cartuchos como falsamente afirma la policía; empero además, en el bolsillo delantero del pantalón le encontraron un celular marca Nokia sin chip, sin batería y sin tapa; señalando, que recibe el nombre de 17 años de edad, natural de Trujillo, soltero, sin ocupación conocida, sin documentos personales a la vista, manifestando así mismo, que las armas de fuego las tienen el sujeto conocido como “TIGRE” y la otra (arma) la tía “CARMEN”; encontrándose al parecer en otras investigaciones en trámite a nivel policial y judicial; empero por el hecho de no haberse presentado al Juzgado a la diligencia de Esclarecimiento de hechos, como se advierte de fojas cuarenta y cinco, setenta y nueve, ochenta y cuatro y ochenta y dos, la conducta disocial de dicho infractor debe tenerse presente al momento de expedir el fallo correspondiente;

CUARTO. Que, consecuentemente, la materialidad de la infracción y la responsabilidad del citado adolescente, ha quedado acreditada fehacientemente con el Informe Policial, Acta de intervención, Acta de hallazgos y recojo, Acta de registro personal, Referencia personal del tutelado de, Certificado Médico Legal de fojas catorce; así como, con el Informe Pericial de Restos de disparo de arma de fuego de fojas cien, de cuyas conclusiones aparece: “El análisis de las muestras correspondientes a: **G.N.U., DIO POSITIVO para plomo, Antimonio y Bario**”, compatible con restos de disparos de arma de fuego, por consiguiente, si bien es cierto el arma o armas de fuego no se le han incautado en la intervención y registro, también es cierto que el propio investigado en su referida declaración personal a nivel preliminar, ha señalado que las ramas de fuego con las que hicieron disparos el día anterior, las tenían los sujetos “TIGRE” Y “CARMEN” y de modo que tratándose de un delito de peligro, basta tener el arma de fuego en su poder para que concurran todos

los elementos del tipo penal; quedando así superado el principio de presunción de inocencia reconocido en el artículo 2, numeral 24, acápite e) de la Constitución Política del Estado, debiendo aplicarse la medida socioeducativa que corresponda, debiendo tener en cuenta para la graduación las condiciones personales del infractor que en parte han sido glosadas anteriormente, que en este caso, proviene de una familia desorganizada desde niño, que no registra anotación judicial alguna, conforme a la comunicación; por lo que en aplicación de los principios de proporcionalidad y lesividad previstos en los artículos VIII y IX del Título Preliminar del Código Penal de aplicación supletoria, corresponde ser sancionado con la medida Socioeducativa de Libertad Restringida, a fin de que el citado infractor se reeduce y rehabilite y de esa forma se reintegre a la sociedad como ciudadano útil;

QUINTO. Que, así mismo, estando acreditada la responsabilidad del mencionado infractor, el daño ocasionado a la sociedad y al Estado con el accionar de su conducta peligrosa al hacer uso de arma de fuego y hacer disparos sin motivo aparente, se debe resarcir por el perjuicio ocasionado al bien jurídico tutelado, en este caso la tranquilidad pública, fijándose una reparación civil proporcional al daño causado y la posibilidad del padre teniéndose en cuenta además, el Informe Social corriente de fojas ciento veinticuatro a ciento veinticinco, del que aparece que el adolescente fue abandonado por sus padres desde niño conjuntamente con sus cinco hermanos menores, quien vive en Arequipa con su actual pareja, siendo el último el investigado; en el aspecto de salud, no fue constatado, por no encontrarse en su casa al momento de la visita, pero al parecer no sufre de ninguna enfermedad; en el aspecto económico, la hermana del adolescente, quien fue visitada por la Asistente Social, dijo que sus ingresos provienen del trabajo de perfilar calzado, percibiendo entre S/.150.00 a S/.180.00 Nuevos Soles semanales; en cuanto a la vivienda, es casa de material rústico, adobe, caña con barro y madera, ocupando uno de los ambientes el citado adolescente; finalmente en cuanto a la situación del investigado, eventualmente se encuentra en Lima, porque dicho adolescente vive con ella; Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 159 inciso 6) y 139 5) de la Constitución Política del Estado; artículos 214, 215, 216, 217 acápite e), 235 y 236 acápite a) del Código de los Niños y Adolescentes; y el artículo

279 del Código penal; así mismo, de conformidad con la Opinión de la Señora Fiscal de Familia en su dictamen, el Juzgado Especializado de Familia, con criterio de conciencia que la ley faculta, administrando justicia a nombre de la nación, con criterio de conciencia que la ley faculta, administrando justicia a nombre de la nación.

Falla:

1. Pronunciándose por la **RESPONSABILIDAD** del adolescente por Infracción a la Ley Penal contra la Seguridad Pública y de Peligro Común, en la modalidad de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en agravio del ESTADO;
2. En consecuencia, se aplica la MEDIDA **SOCIOEDUCATIVA DE LIBERTAD RESTRINGIDA de OCHO MESES**, que se hará efectiva en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo de esta ciudad, a partir de la fecha que empiece el programa respectivo”.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Walter Ramos Manay asesor de tesis del trabajo de investigación del estudiante Pavel Iván Vásquez Torres

Titulada:

"RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS ADOLESCENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE", luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma un índice de similitud de 20% verificable en el reporte de similitud del programa turnitin.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 2024



M. Sc. Walter Ramos Manay
ASESOR



Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega:	PAVEL VASQUEZ
Título del ejercicio:	REVISION DE PYTO
Título de la entrega:	TESIS FINAL
Nombre del archivo:	V_SQUEZ_TORRES_PAVEL_Reparado.docx
Tamaño del archivo:	176.72K
Total páginas:	93
Total de palabras:	19,252
Total de caracteres:	106,647
Fecha de entrega:	20-feb.-2024 04:43a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre...	2299508408



M. Sc. Walter Ramos Manay
ASESOR

TESIS FINAL

INFORME DE ORIGINALIDAD

20%

INDICE DE SIMILITUD

20%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

7%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1 **hdl.handle.net**
Fuente de Internet

18%

2 Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo
Trabajo del estudiante

1%

3 **vsip.info**
Fuente de Internet

<1%

4 **www.pj.gob.pe**
Fuente de Internet

<1%

5 **es.slideshare.net**
Fuente de Internet

<1%

6 Submitted to Chaparral High School
Trabajo del estudiante

<1%

7 Submitted to Universidad Ricardo Palma
Trabajo del estudiante

<1%

M. Sc. Walter Ramos Manay
ASESOR